

RV: SKANDIA / CONTESTACIÓN DE DEMANDA / 76001310501220230036300

Juzgado 12 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 10/11/2023 16:57

Para: Lucia Cristina Revelo Noguera <lrevelon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (12 MB)

GCL 10 11 2023 DGF (CD) (2023-363) + A.pdf;



Dirección: Carrera 10 No 12-15 piso 9 Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía de Cali

Teléfono: 8986868 ext. 3122

Horario de Atención: lunes a viernes 8 am a 12m y 1pm a 5 pm.

Micrositio Web: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-12-laboral-del-circuito-de-cali>



Por favor no imprima este correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta.



De: Diana Gomez <dgomez@godoycordoba.com>

Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 16:56

Para: Juzgado 12 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>

Asunto: SKANDIA / CONTESTACIÓN DE DEMANDA / 76001310501220230036300

Señor(a)

JUEZ DOCE (12) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **NURY FABIOLA GARZON BUSTOS** contra **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

RADICACIÓN. 76001310501220230036300.

ASUNTO. Contestación de la demanda, llamamiento en garantía e incidente de nulidad por **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

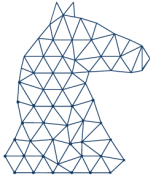
DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA, identificada como aparece al pie de mi antefirma, en mi condición de abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderada especial de **SKANDIA ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, parte demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder y el certificado de representación, remito en adjunto el escrito de contestación de la demanda junto a las pruebas y los respectivos anexos.

Dando cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP, se remite el presente memorial con copia a las siguientes direcciones electrónicas:

1. Parte demandante: procesos@tiradoescobar.com

Por último, para efectos de notificaciones las recibiré en los correos electrónicos notificaciones@godoycordoba.com y dgomez@godoycordoba.com este último debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor juez,



Diana Gómez Fonseca

C.C. 1.023.967.512 de Bogotá.

L.T. 30.201 del C.S. de la J.

dgomez@godoycordoba.com

Bogotá · Av. Calle 84A # 10-33, piso 5

Cel: 311-810-0969

PBX: (60-1) 317 4628

www.godoycordoba.com

Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Littler

Godoy Córdoba Abogados forma parte de la práctica de derecho internacional Littler Global, que opera en todo el mundo a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visite: www.Littler.com

Señores

JUZGADO DOCE (12) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

J12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **NURY FABIOLA GARZON BUSTOS** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

RADICACIÓN. 76001310501220230036300.

ASUNTO. Contestación de demanda **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA, identificada como aparece al pie de mi correspondiente antefirma, en mi condición de abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderada general de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020., el cual se allega con el presente escrito, y en virtud del cual solicito reconocimiento de personería para actuar, doy contestación a la demanda que dio origen al proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS.

Al 1.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es una circunstancia personal de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 2.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la administradora del régimen de prima media, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 3.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la administradora del régimen de prima media, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 4.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 5.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir como actual administradora de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 6.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir como actual administradora de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 7.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es una circunstancia personal de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.



Al 8.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir como actual administradora de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 9.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 10.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 11.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la administradora del régimen de prima media, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 12.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es la administradora del régimen de prima media, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 13.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es el Ministerio de Hacienda y crédito Público, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 14.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es el Ministerio de Hacienda y crédito Público, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 15.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpatría hoy Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 16.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpatría hoy Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 17.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Porvenir como actual administradora de la demandante, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 18.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia al historial de cotizaciones de la demandante en al sistema general en pensiones en especial con su administradora actual, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 18.1.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia al historial de cotizaciones de la demandante en al sistema general en pensiones en especial con su administradora actual, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 18.2.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia al historial de cotizaciones de la demandante en al sistema general en pensiones en especial con su administradora actual, en igual sentido hace alusión a la forma liquidataria de la pensión de vejez en el RPM, liquidación ajena a mi representada, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.
Al 19.	No me consta. Por cuanto el hecho hace referencia a un tercero ajeno a mi representada, como lo es Colpatría hoy Porvenir, lo cual impide efectuar un pronunciamiento sobre el particular.

II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES.

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda que pretendan hacer recaer en mi representada cualquier tipo de consecuencia jurídica y/o económica en virtud del presente proceso y solicito al Despacho absuelva de todas y cada una de ellas a SKANDIA, por las razones que se expondrán en las excepciones de la defensa, así como frente a cada hecho y pretensión particular.

- PRETENSIONES PRINCIPALES:

<p>A la 1.</p>	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>En igual sentido, se tiene que el demandante a la fecha se encuentra PENSIONADO con mi Porvenir bajo la modalidad de retiro programado, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
<p>A la 2.</p>	<p>Me opongo, toda vez que la demandante alega una falencia en la información entregada, luego debe tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorado de manera completa, clara, veraz, oportuna, adecuada y suficiente sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación.</p> <p>Se llama la atención del Despacho, en cuanto que la demandante en los hechos que relata lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada. Cosa diferente es que la actora, en el marco de una actuación contraria a la de un buen padre de familia, no realizó ninguna gestión tendiente a informarse sobre</p>



	<p>su futuro pensional, situación que se acredita con el hecho de que en el expediente no obre medio de prueba alguno que permita evidenciar una solicitud de traslado de régimen o una queja, petición o reclamo relativo al deber de información, en más de 20 años de afiliación.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar que no se puede imponer a las administradoras de pensiones obligaciones que no se tenían para el momento en que se efectuaron las afiliaciones. Nótese que, sólo fue hasta la expedición del Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, que las AFP adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general. De hecho, la obligación de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen, nace sólo a partir del inciso 4º del artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, que modificó a su vez el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, que indica:</p> <p><i>"En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos" o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto".</i></p> <p>Finalmente, pongo de presente al despacho que la actora, desde el año 1995, solicitó libre y voluntariamente pertenecer a un régimen de capitalización, con lo cual y en el entendido de que el artículo 2.32.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 establece, como requisitos para ello, el contar con un capital ahorrado equivalente al 50% del capital necesario para financiar una pensión mínima o el 100%, resulta ilógico que la actora indique que desconocía las características y/o condiciones del RAIS y menos aún que se le causara algún tipo de perjuicio.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p> <p>En consecuencia, no hay lugar a acceder a la pretensión incoada en este numeral.</p>
A la 3.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de</p>



	<p>responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>En igual sentido, se tiene que el demandante a la fecha se encuentra <u>PENSIONADO</u> con mi Porvenir bajo la modalidad de retiro programado, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
A la 4.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>En igual sentido, se tiene que el demandante a la fecha se encuentra <u>PENSIONADO</u> con mi Porvenir bajo la modalidad de retiro programado, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
A la 5.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus</p>



	<p>obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>En igual sentido, se tiene que el demandante a la fecha se encuentra PENSIONADO con mi Porvenir bajo la modalidad de retiro programado, luego es claro que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SL 373 de 2021, ha establecido que si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso, ya que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, ya que ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema general en pensiones en todo su conjunto.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
A la 6.	<p>Me opongo, en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a cualquier condena ultra o extra petita.</p>
A la 7.	<p>Me opongo, en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a la imposición de condena en costas y agencias en derecho.</p>

- **PRETENSIONES SUBSIDIARIAS RESPECTO DE PORVENIR:**

A la 1.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p> <p>Ahora bien, y teniendo en cuenta que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, en el proceso no existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una diferencia entre la mesada</p>
----------------	---



pensional que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola no es suficiente para dar por acreditado un perjuicio. Lo anterior también sustentado de conformidad con la Sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala tercera (03ª) de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que concluye que:

"asumir que eventualmente la mesada pensional entre el RAIS y el RPM es culpa de LA AFP resulta una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones."

Es decir, deducir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a desconocer la constitucionalidad y legalidad de ambos regímenes, por cuanto los regímenes pensionales existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.

Ahora bien, y si en gracia de discusión se acepta la existencia de un perjuicio, es fundamental llamar la atención del despacho en cuanto que **este se encuentra PRESCRITO.**

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en la Sentencia SL10209 del 11 de julio de 2017, señaló:

"El tópico que corresponde en esta oportunidad resolver, se centra en establecer si el término prescriptivo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe contarse o no desde que el derecho se hace exigible, esto es a partir de la sentencia constitutiva o desde la fecha (sic)

Para dar respuesta al reproche que se realiza contra la sentencia del Tribunal, se precisa que según los términos de los artículos sobre los que se estructura el cargo, la prescripción extintiva comienza a contarse a partir del día en que la obligación se hace exigible, es decir, desde que exista la posibilidad de accionar el cumplimiento de la obligación,



	<p><i>por manera que, si el trabajador no ejerce su acción, debe soportar la consecuencia de que su derecho prescriba”</i></p> <p>La misma Corporación en la Sentencia SL373 de 2021 concluyó:</p> <p>“El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.</p> <p>En la medida que el daño es <u>PERCEPTIBLE O APRECIABLE</u> en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, <u>el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento.”</u></p> <p>Contrario al derecho pensional los perjuicios son prescriptibles si no se reclaman oportunamente, como ocurre en el asunto que se examina, pues el demandante radicó demanda el 30 de agosto de 2023, y como se encuentra plenamente probado Porvenir le reconoció pensión de vejez el pasado 14 de febrero de 2017.</p> <p><u>Es decir, en el presente caso es palmario que la solicitud de perjuicios de la parte demandante se encuentra PRESCRITA.</u></p>
A la 2.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
A la 3.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus</p>



	<p>obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p> <p>Vale la pena mencionar que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, sin embargo, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una manifestación de diferencias entre las mesadas pensionales que se tendría en el RAIS y la que se tendría en el RPM, situación que por sí sola NO es suficiente para dar por acreditado un perjuicio.</p> <p>Lo anterior sustentado de conformidad con la sentencia de radicado 2020-00252 de la Sala Tercera de decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín:</p> <p><i>"una conclusión desafortunada del juzgador de prima instancia, pues con esta se desconoce la estructura y el funcionamiento del régimen de capitalización, pues esos dineros acumulados en la cuenta de ahorro individual, siempre estuvieron sujetos a los rendimientos financieros y a los vaivenes de la economía, durante todo el tiempo en que la actora estuvo afiliado a los fondos privados de pensiones, de donde se concluye que la consolidación de ese capital necesario para financiar la pensión de vejez, se vio afectado por variables micro y macroeconómicas, como es el caso de la inflación, las inversiones, rentabilidades, utilidades, inclusive la posibilidad que tenía la actora de realizar aportes voluntarios, (...) variables y factores que no le son atribuibles en su totalidad al fondo privado de pensiones."</i></p> <p>En ese orden de ideas aludir una responsabilidad patrimonial a partir de las distintas fórmulas aplicadas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y en RPM equivaldría a <u>desconocer la constitucionalidad y legalidad de ambos regímenes</u>, por cuanto los regímenes pensionales existentes en Colombia cuentan con regulación propia y fuentes de financiación diferentes, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional.</p>
A la 4.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p>



A la 5.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Por otro lado, con fundamento en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, tradicionalmente se ha reconocido que los perjuicios patrimoniales comprenden dos modalidades: el daño emergente y el lucro cesante. Según lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, el lucro cesante ha sido entendido como “la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, ‘está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho’ (CSJ SC de 7 de mayo de 1968)”.</p> <p>Sin embargo, el daño que eventualmente podrían sufrir los pensionados no corresponde precisamente a la disminución de un ingreso, como se plantea en la sentencia SL373-2021, pues acoger esta tesis supone, por una parte, desconocer las diferencias que existen entre el RAIS y el RPM, particularmente en lo que respecta a la lógica económica que subyace a cada uno, y, por otra, eliminar en la práctica el RAIS.</p> <p>En cuanto a lo primero, se ha señalado que el RPMPD se caracteriza porque la entidad administradora calcula la cotización a pagar como una prima promedio aplicable al conjunto de la población asegurada, de manera que la cotización pueda cubrir efectivamente las erogaciones por concepto de pensiones. (...) El régimen pensional de prima media es de «prestación definida» en el sentido de que no deja al azar la cuantificación de las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones, sino que las define previamente en la ley. Por eso en este régimen, la ley define con exactitud el número mínimo de semanas que se exige para reconocer la pensión, las edades a partir de las cuales las reconoce y la cuantía de la pensión”.</p> <p>Por su parte, el RAIS opera sobre la base de la acumulación de capital en una cuenta de ahorro particular de cada afiliado, de manera que la pensión se causa cuando se cumple con la condición de que se reúna en la cuenta individual el capital requerido para financiarla, y, al materializarse los restantes requisitos, la cuantía de la pensión es proporcional a las sumas acumuladas. Sobre la financiación de estas pensiones, la doctrina especializada señala que la “cotización hace el papel de la cuota de un ahorro que se destina a la capitalización de la pensión. En consecuencia, existirá una relación directa entre</p>
----------------	---



	<p>la cantidad cotizada y la expectativa de pensión: a mayor cotización mayor posibilidad de pensión y viceversa. (...) Como sistema de capitalización, el régimen garantiza el beneficio, es decir, la pensión, únicamente con el cumplimiento de la condición de reunir en la cuenta individual el capital que financie la pensión (...)" En consecuencia, no resulta admisible calificar como "daño" la diferencia en los montos pensionales, comoquiera que es claro que no es posible equiparar la mesada pensional en uno y otro régimen, dadas las particularidades de cada uno.</p>
A la 6.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Por otro lado, con fundamento en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, tradicionalmente se ha reconocido que los perjuicios patrimoniales comprenden dos modalidades: el daño emergente y el lucro cesante. Según lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, el lucro cesante ha sido entendido como "la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, 'está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho' (CSJ SC de 7 de mayo de 1968)".</p> <p>Sin embargo, el daño que eventualmente podrían sufrir los pensionados no corresponde precisamente a la disminución de un ingreso, como se plantea en la sentencia SL373-2021, pues acoger esta tesis supone, por una parte, desconocer las diferencias que existen entre el RAIS y el RPM, particularmente en lo que respecta a la lógica económica que subyace a cada uno, y, por otra, eliminar en la práctica el RAIS.</p> <p>En cuanto a lo primero, se ha señalado que el RPMPD se caracteriza porque la entidad administradora calcula la cotización a pagar como una prima promedio aplicable al conjunto de la población asegurada, de manera que la cotización pueda cubrir efectivamente las erogaciones por concepto de pensiones. (...) El régimen pensional de prima media es de «prestación definida» en el sentido de que no deja al azar la cuantificación de las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones, sino que las define previamente en la ley. Por eso en este régimen, la ley define con exactitud el número mínimo de semanas que se exige para reconocer la pensión, las edades a partir de las cuales las reconoce y la cuantía de la pensión".</p>



	<p>Por su parte, el RAIS opera sobre la base de la acumulación de capital en una cuenta de ahorro particular de cada afiliado, de manera que la pensión se causa cuando se cumple con la condición de que se reúna en la cuenta individual el capital requerido para financiarla, y, al materializarse los restantes requisitos, la cuantía de la pensión es proporcional a las sumas acumuladas. Sobre la financiación de estas pensiones, la doctrina especializada señala que la "cotización hace el papel de la cuota de un ahorro que se destina a la capitalización de la pensión. En consecuencia, existirá una relación directa entre la cantidad cotizada y la expectativa de pensión: a mayor cotización mayor posibilidad de pensión y viceversa. (...) Como sistema de capitalización, el régimen garantiza el beneficio, es decir, la pensión, únicamente con el cumplimiento de la condición de reunir en la cuenta individual el capital que financie la pensión (...)". En consecuencia, no resulta admisible calificar como "daño" la diferencia en los montos pensionales, comoquiera que es claro que no es posible equiparar la mesada pensional en uno y otro régimen, dadas las particularidades de cada uno.</p>
A la 7.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos a los cuales hoy tiene derecho y se utilizaron para financiar su pensión.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p>
A la 8.	<p>Me opongo, si bien es una pretensión ajena a mi representada, me opongo, que mi defendida en caso hipotético resulte responsable por algún tipo de responsabilidad, toda vez que esta cumplió de manera cabal cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p><u>Ahora bien, se llama la atención del despacho en cuanto que la demandante no realizó el traslado de régimen pensional con mi representada, y tampoco es la administradora actual.</u></p> <p>Vale la pena mencionar que corresponde a la demandante probar el perjuicio reclamado, sin embargo, en el proceso NO existe prueba si quiera sumaria de los supuestos perjuicios; simplemente existe una manifestación de diferencias entre las mesadas pensionales que se tendría en el RAIS y la que se tendría en</p>



	el RPM, situación que por sí sola NO es suficiente para dar por acreditado un perjuicio.
A la 9.	Me opongo , en la medida que mi representada deberá ser absuelta de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, no habrá lugar a la imposición de condena en costas y agencias en derecho.

III. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

A continuación, se presentan los hechos, fundamentos y razones de la defensa de mi representada con base en los cuales se deberá proferir sentencia absolutoria atendiendo a que todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda quedarán plenamente desvirtuados.

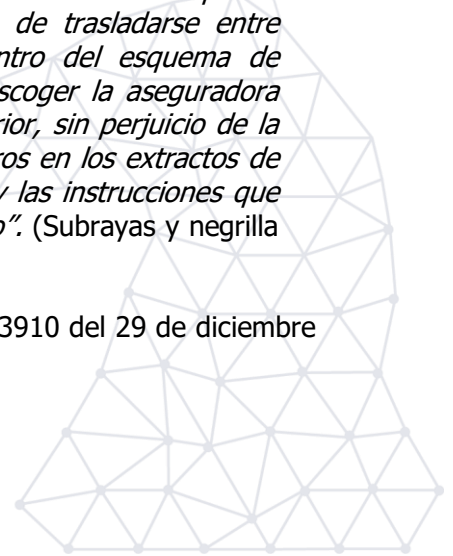
1. LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y BUEN CONSEJO NO SE ENCONTRABA VIGENTE PARA EL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL NI PARA EL MOMENTO DE LA VINCULACIÓN AL FONDO ALTERNATIVO.

En todo caso, si en el debate probatorio del proceso, se llegase a probar que hubo una falencia informativa por parte del fondo inicial con el que se traslada de régimen pensional, se hace indispensable señalar que las obligaciones generales y especiales vigentes para el momento del traslado inicial de régimen pensional de la demandante, se encuentran establecidas en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, dentro de las cuales no se establece el deber de información alegado por la parte demandante.

Aunado a lo anterior, se tiene que sólo fue hasta la expedición del Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, que las AFP adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general. De hecho, la obligación de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen, nace sólo a partir del inciso cuarto del artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, que modificó a su vez el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, en el cual se indica:

"En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos" o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).

Así se pronunció la Superintendencia Financiera en Concepto 2015123910 del 29 de diciembre de 2015, en el que se señaló:





*"Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber de asesoría, **sólo hasta la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, es claro el deber legal de las administradoras de "poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado", por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones la asesoría podía no contener la ilustración correspondiente a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión**". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

2. LA PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE PROBAR LOS PERJUICIOS RECLAMADOS

Incorre la parte demandante en una indebida acreditación del aparente perjuicio sufrido, ello, pues pretende argumentar que a partir de un supuesto incumplimiento al deber de información en cabeza de mi representada se le ocasionó un perjuicio, el cual pretende probar con una liquidación carente de todo fundamento y en la cual parte de la diferencia entre mesadas pensionales entre el RAIS y el RPM con la que pretende cuantificar la aparente indemnización de perjuicios, sin precisar el tipo de perjuicio, los elementos de la responsabilidad que los sustentan o el tipo de imputación. Sin embargo, para probar perjuicios de esta envergadura se hace necesario analizar el régimen jurídico aplicable a los supuestos de incumplimiento de deberes jurídicos en la etapa precontractual, cuando el negocio jurídico efectivamente se ha celebrado. En ese contexto, los requisitos que se deben acreditar para que a una persona le sea imputable la obligación indemnizatoria corresponden a los del sistema de responsabilidad civil contractual, que de conformidad con la jurisprudencia civil son los siguientes:

- a.-) el incumplimiento de una obligación preexistente;*
- b.-) el daño sufrido por el acreedor;*
- c.-) un factor de atribución de la responsabilidad, por regla general la culpa;*
- d.-) la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño;*
- e.-) la mora del deudor (artículo 1615 del Código Civil)¹.*

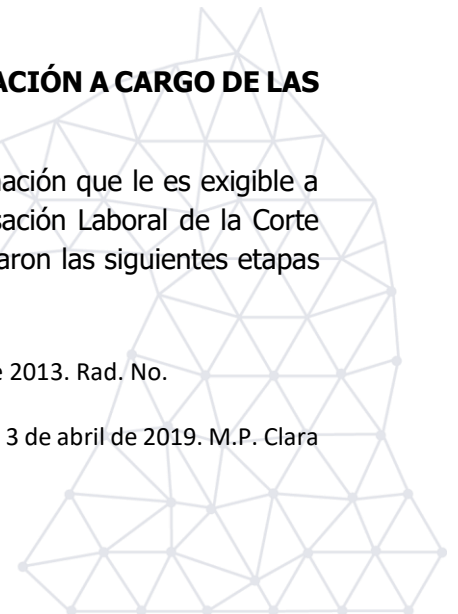
Presupuesto que bajo ninguna circunstancia se cumplen en el presente caso, como vemos seguidamente:

a. NO EXISTE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN A CARGO DE LAS AFP

Con el fin de comprender el contenido y alcance del deber de información que le es exigible a las AFP, resulta ilustrativo el recuento normativo que la Sala de Casación Laboral de la Corte realizó en la sentencia SL1452-2019². En esa providencia se identificaron las siguientes etapas de desarrollo legislativo al respecto:

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013. Rad. No. 4700131030052006-00045-01. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia SL1452-2019 de 3 de abril de 2019. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.





Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n. 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Al respecto, de la valoración conjunta de las normas citadas se destaca que la obligación de información, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003, consistía en comunicarles a los potenciales afiliados toda la información que tuviera por objeto: (i) lograr una selección libre y voluntaria del régimen pensional al que quisieran pertenecer; y (ii) garantizar la transparencia de la operación. Su alcance se limitaba, entonces, a poner en conocimiento de los afiliados todos los hechos o circunstancias relativos al objeto del negocio jurídico que se pretendía celebrar; es decir, sobre el traslado al RAIS.

Delimitado de esta forma, es claro que el deber de información a cargo de las AFP se satisfacía al comunicarle al afiliado, de forma clara, completa y veraz: (i) en qué consistía, cómo operaba



y cuáles eran las características propias del RAIS; (ii) los requisitos que debían cumplirse para obtener una pensión en este régimen; (iii) las distintas modalidades de pensión a las que podía aspirar; y (iv) los derechos y las obligaciones que surgían para el afiliado. Estos datos resultaban suficientes para garantizar que el afiliado contaba con elementos de juicio objetivos que le permitirían tomar una decisión consciente. Y es que, se insiste, “*el contenido del deber [de información] se acota a lo que sea relevante y suficiente con miras a la toma de una decisión*”³. Basta, entonces, con suministrarle al afiliado la información que le permita tomar una decisión libre en el sentido de contratar o abstenerse de hacerlo, según lo que considere más favorable a sus intereses.

En ese contexto, la valoración de la información entregada a la luz de los intereses particulares de su receptor y su comparación con otras alternativas que ofrece el mercado, escapan del alcance del deber de información a cargo de las AFP, en el marco, se repite, de la legislación aplicable para la época que se está analizando. Este último, se reitera, únicamente comprendía una exposición clara, completa y veraz sobre el régimen administrado por la AFP, con el fin del que el afiliado contara con los elementos de juicio necesarios para comparar esa oferta con las demás del mercado y escoger así la que resultara más adecuada para la satisfacción de sus necesidades.

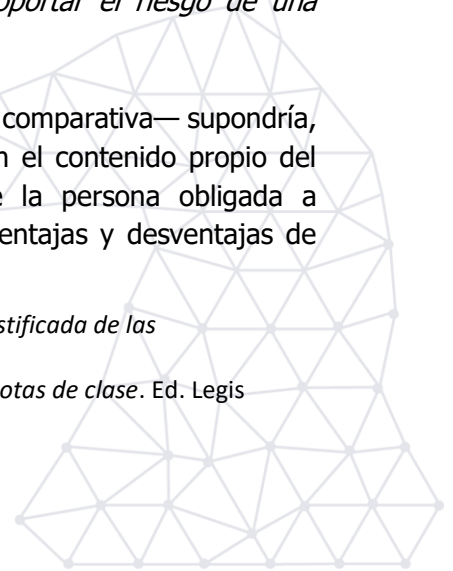
Lo anterior, porque lo que resulta relevante para la formación de un consentimiento informado es conocer las condiciones propias del negocio que habrá de celebrarse, pero su mayor conveniencia en relación con otras alternativas es un asunto que le compete exclusivamente al receptor de la información. Por esta razón, la doctrina ha explicado que

*“al determinar el contenido del deber de información durante las negociaciones se debe decir, antes que nada, que ese deber no se relaciona con la conveniencia del contrato, sino con circunstancias objetivas que lo pueden hacer inválido, ineficaz o inútil [...]. El deber de información no puede comprender la conveniencia del negocio, toda vez que la mayor o menor conveniencia, es decir, el mayor o menor provecho del negocio, está dentro del juego normal de la contratación. Cada cual tiene la carga de valorar, por sí mismo, la conveniencia del contrato que celebra, y así, soportar el riesgo de una valoración equivocada (...)”*⁴.

Admitir lo contrario —que las AFP tenían el deber de realizar esa labor comparativa— supondría, aplicar retroactivamente las normas y darle al deber de información el contenido propio del deber de consejo o asesoría. Este último se caracteriza porque la persona obligada a suministrarlo realiza una valoración de la información, analiza las ventajas y desventajas de

³ Monsalve Caballero, Vladimir. *Responsabilidad precontractual. La ruptura injustificada de las negociaciones*. Ed. Ibáñez. Bogotá (2014). Pág. 157.

⁴ Bianca, Cesare Massimo. Citado por: Cárdenas Mejía, Juan Pablo. *Contratos. Notas de clase*. Ed. Legis Editores S.A. Bogotá (2021). Pág. 117.





adoptar una decisión en un sentido u otro, y le advierte estas consecuencias al receptor. Este deber se diferencia del de información en la medida que, mientras que este último se agota poniendo en conocimiento de la parte interesada lo necesario para que adopte una decisión libre y consciente, el deber de consejo implica orientar a quien lo recibe sobre la conveniencia de adoptar una determinada decisión, especialmente cuando se trata de escoger entre diversas opciones. Así, el deudor del consejo debe advertirle a su receptor sobre los riesgos y los beneficios de las distintas alternativas⁵.

En resumen, el requisito del incumplimiento del deber de información a cargo de las AFP implica que la demandante acredite en el proceso que no se suministraron los datos objetivos sobre el RAIS, o que la información estaba incompleta o era falsa, de manera que se le impidió a la demandante tomar una decisión libre y voluntaria. Para la valoración de este requisito, debe compararse la conducta desplegada por la AFP con el contenido del deber de información en los términos en que fue delimitado por los artículos 13 de la Ley 100 de 1993 y 97 del Estatuto Orgánico Financiero, en su redacción original al tiempo en el que ocurrió el traslado. La falta de asesoría o consejo, que se concreta en realizar una comparación de las ventajas y desventajas entre los distintos regímenes pensionales, no es constitutiva de incumplimiento obligacional, pues no era un deber exigible para las AFP en la época en la que se realizaron los traslados de régimen pensional objeto de análisis.

Finalmente, aterrizando al caso bajo examen, con el formulario de afiliación de la demandante, se evidencia claramente su deseo de pertenecer al régimen de ahorro individual, posteriormente, de vincularse a un fondo alternativo y de haber sido informada sobre estos de forma clara, oportuna y suficiente.

De esta manera, es claro y evidente que firmó los formularios aceptando que recibió la información pertinente y que conocía las implicaciones del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, su posterior vinculación a un fondo alternativo, así como el término que tenía para la posibilidad de retracto.

De acuerdo con la Ley, la selección de régimen dentro del Sistema General de Pensiones es libre y voluntaria por parte del afiliado, por lo que, en tal sentido, al seleccionar el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad la demandante aceptó todas y cada una de las condiciones propias de dicho régimen, conforme lo dispone la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. **En este**

⁵ En la doctrina extranjera se reconoce que “la obligación de consejo comporta un juicio de valor: se trata de indicar a la otra parte las consecuencias del contrato en mira para darle la oportunidad de celebrarlo o no. [...] Por el contrario, la información excluye cualquier opinión y no está destinada a orientar la decisión de la contraparte. Su objeto es únicamente ponerlo al tanto de ciertos elementos de información de manera puramente objetiva, a fin de permitirle decidir con conocimiento de causa”. Stark, Roland y Boyer, citados por: Fernando Hinestrosa Forero. *Tratado de las obligaciones II: De las fuentes de las obligaciones – El negocio jurídico*. Vol. I. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá (2015). Pág. 289.



sentido, es evidente que no se configura perjuicio alguno al no haberse vulnerado el deber de información que reposaba en cabeza de mi representada.

B. LA NATURALEZA DE LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES DEL RAIS: LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

De manera general, la Responsabilidad civil puede definirse como la obligación de reparar los daños y perjuicios que una persona haya causado a otra como consecuencia de su comportamiento, sea éste activo u omisivo. En estos términos, y teniendo en cuenta las circunstancias en las que se generó el presunto daño a la víctima, la responsabilidad civil tiene dos esferas principales: la responsabilidad civil contractual (Artículos 1602 a 1617 del Código Civil) y la Responsabilidad Civil Extracontractual (Artículos 2341 a 2360 del Código Civil). En este orden de ideas, la aplicación de uno u otro régimen jurídico dependerá de si el daño se produce como corolario a de la existencia de un vínculo jurídico previo o, por el contrario, si se presenta éste como consecuencia de la violación del deber genérico de no causar daño a los demás.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico únicamente existe regulación sobre estos dos regímenes de responsabilidad civil, sin embargo, se ha reconocido un supuesto adicional que reviste características particulares que dificultan ubicarlo dentro de uno de estos dos ámbitos de la responsabilidad: la *Responsabilidad precontractual*. Dicho concepto nace con ocasión del incumplimiento de deberes de conducta que son exigibles durante la etapa previa al perfeccionamiento de una relación jurídica, los cuales pueden enmarcarse dentro de las siguientes hipótesis: i) la ruptura injustificada de las negociaciones; ii) la suscripción de un contrato viciado de nulidad; o iii) **la suscripción de un contrato válido, pero en condiciones distintas a las que la parte afectada habría accedido de no haber mediado el incumplimiento de deberes precontractuales.**

Este sistema de responsabilidad se ha desarrollado, principalmente, con fundamento en el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual *"las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen"*.

De esta manera, la legislación mercantil colombiana reconoce la importancia de la buena fe durante todas las etapas de un negocio jurídico (Art. 871 del C. de Co.), la cual impone una regla de conducta que exige a las partes el deber de actuar con honestidad, corrección y coherencia desde las etapas previas al perfeccionamiento del acto que se pretenda celebrar. Aunado a lo anterior, de la buena fe objetiva surgen deberes complementarios de conducta que son exigibles incluso si las partes no los han pactado expresamente. Entre estos deberes se destaca el de **información** dentro de la etapa precontractual, en la cual los futuros contratantes están reuniendo los elementos de juicio necesarios para emitir su respectiva declaración de voluntad.

Para la aplicación de uno u otro régimen a los eventos de responsabilidad precontractual, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, al analizar un caso de publicidad engañosa



en el que una constructora hizo creer a los adquirentes que las unidades habitacionales de la urbanización contarían con una serie de instalaciones que nunca llegaron a ejecutarse, precisó:

"5.2. De otro lado se hace necesario puntualizar, que la 'responsabilidad' proveniente de la 'publicidad engañosa', sobre los bienes o servicios cuya comercialización se pretenda, debe examinarse en varios momentos, atendiendo los avances que con ella se alcancen en la actividad negocial proyectada y en consideración a los efectos producidos en los estadios que se presentan en su desarrollo.

"5.3. Sobre el particular resulta pertinente mencionar:

*"a) En la etapa de los 'tratos preliminares' la controversia se ubica en el ámbito de la 'responsabilidad civil precontractual' o 'extracontractual' dado que para ese instante no existe, o falta la celebración del 'convenio o acuerdo' entre los sujetos con interés o a favor de quien se hace la 'propaganda' y quienes como 'consumidores' resultan incentivados con la misma para la adquisición de lo ofrecido; b) **si se ha celebrado el negocio jurídico genera 'acción contractual' y además los efectos de la pluricitada 'conducta ilegal', podrían manifestarse hasta el punto de viciar el consentimiento por 'error o dolo', en los términos de los supuestos previstos en los artículos 1510, 1511 y 1515 del Código Civil, al igual que en el 900 del Estatuto Mercantil, lo cual habilita como mecanismo adicional de protección al 'consumidor', la impugnación de la validez del 'contrato', de conformidad con el inciso final del precepto 1741, en armonía con el 1743 ibídem, y en su caso, el último aparte de la citada norma comercial; además de la formulación de otras súplicas que jurídicamente sean acumulables**".(Subrayado fuera del texto).*

De acuerdo con el extracto jurisprudencial transcrito, es posible colegir que, en un supuesto de incumplimiento del deber de información en la etapa precontractual, la responsabilidad civil debe juzgarse de conformidad con los parámetros de la responsabilidad civil contractual cuando el contrato finalmente se haya celebrado y los efectos se manifiesten durante su ejecución. En este orden de ideas, es posible afirmar que, para efectos de determinar la eventual responsabilidad civil de las Administradoras de Fondos de Pensiones del RAIS por el supuesto incumplimiento del deber de información al realizarse el traslado entre regímenes pensionales, deben seguirse las reglas de la responsabilidad civil contractual.

Lo anterior debido a que la Demanda formulada se enmarca dentro de supuestos de hecho en los que el traslado de régimen pensional se perfeccionó de forma efectiva, conservando hasta el momento su validez, por lo que es claro que se estableció y creó un vínculo jurídico del que surgieron derechos y obligaciones entre las partes.

De este modo, se reitera que, a pesar de la aparente ubicación de la presunta responsabilidad aplicable a este tipo de pretensiones, según la sentencia SL373 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, en el campo de la responsabilidad extracontractual, lo correcto, en cambio, a la luz de los preceptos legales y jurisprudenciales citados, es debatir la supuesta responsabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo el régimen de la responsabilidad civil de naturaleza precontractual, aplicando los presupuestos de la Responsabilidad Civil Contractual.



C. LA NATURALEZA DEL DEBER DE INFORMACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN DE MEDIO Y NO DE RESULTADO

El deber de información en cabeza de las AFP constituye una obligación de medio, la cual se entiende como aquella en las que el compromiso que asume el deudor se concreta en hacer todo lo necesario para alcanzar el fin práctico perseguido por las partes, pero sin garantizar su efectiva obtención. Lo anterior, debido a que, por la propia naturaleza de la obligación, existen componentes aleatorios que no permiten que el deudor pueda asegurar con su solo comportamiento que se pueda lograr la satisfacción del interés del acreedor; es decir, la AFP realiza todas las gestiones tendientes con el fin de que el afiliado pueda alcanzar el capital necesario para pensionarse sin estar obligado a garantizar que efectivamente logre el objetivo de pensionarse o que alcance determinado monto en su mesada pensional.

Lo anterior, debido a que, por su propia naturaleza o por lo convenido entre los contratantes, existen componentes aleatorios que no permiten que el deudor pueda asegurar que con su solo comportamiento se pueda lograr la satisfacción del interés del acreedor, pues debemos recordar que en la relación de afiliación existe una participación importante del propio afiliado que se encarga de cotizar sus aportes mes a mes. **Si bien las condiciones para calcular la pensión siempre han estado establecidas en la norma, no sucede lo mismo con las variables que afecta el monto de su pensión como lo son sus beneficiarios o el monto de sus aportes, que como se evidencia en su historia laboral fueron cambiando. Ahora, lo que si quedó demostrado es que mi representada administró en debida forma los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante y que llegado el momento le permitió acceder a la pensión de vejez.**

Acorde a lo previamente enunciado, es dable traer a colación la sentencia SL-1452 de 2019, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en *primer lugar*, aborda el estudio del Deber de Información al momento del nacimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cual se encontraba regulado en el Decreto-Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). Al efecto, el artículo 97 del mencionado Decreto- Ley 663 determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones debían suministrar información necesaria para que los futuros afiliados tomaran la decisión de afiliarse al respectivo fondo de manera libre y voluntaria. El artículo en comento, en su numeral primero, preveía lo siguiente:

"1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado".

Así las cosas, de la norma trascrita se puede colegir que para el momento en el que se expide la Ley 100 de 1993, a las Administradoras de Fondos de Pensiones se les impuso un deber simple de información, es decir, que sus promotores suministraran información



suficiente a los posibles afiliados en todo lo relacionado con el producto o servicio que éstos pretendían contratar, **sin que se les impusiera la carga u obligación a las administradoras de fondos de pensiones de dejar evidencia física o material de la información brindada.**

En relación con esta etapa, resulta pertinente precisar que, al tratarse de un deber precontractual que tiene fuente legal, comoquiera que el legislador es quien expresamente lo consagró y delimitó su alcance, rige la prohibición de aplicar retroactivamente la ley, de manera que la conducta de las Administradoras de Fondos de Pensiones del RAIS debe juzgarse según el parámetro de comportamiento determinado por el ordenamiento vigente al tiempo que debió observarse.

Una vez delimitado el Deber de Información según la normatividad aplicable en el tiempo, es jurídicamente dable sostener, sin asomo alguno de duda que, Skandia Pensiones y Cesantías S.A. satisfizo dicha obligación de forma integral, toda vez que la información que brindó fue en cumplimiento de la prenotada obligación fue:

- ✓ **Cierta:** En la medida en que, cuando la demandante se afilió a **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, tuvo pleno conocimiento de las condiciones de ese régimen pensional, y la información/asesoría brindada por el asesor de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** le permitió ser consciente de las circunstancias del RAIS, lo que deja en evidencia, que mi representada en este caso no se reservó o guardó para sí ningún dato relevante para la vinculación jurídica de la Demandante, lo que explica que no obre en el presente proceso prueba que desvirtúe esta afirmación que, por tanto, según los mandatos constitucionales (Ar. 83 de la C.P.) deber ser tenida como plenamente cierta.
- ✓ **Suficiente:** Se toma como la información que logre que el afiliado tenga un conocimiento más amplio sobre las características del sistema, los productos y las condiciones para acceder a uno u otro régimen pensional. Aspecto que se hizo por parte de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, y que permitió que la demandante quedara satisfecho con dicha información/asesoría y acompañamiento a lo largo de su afiliación, pues a la fecha de contestación de la presente Demanda continúa en el RAIS y con mi representada, demostrando de forma inequívoca su actuar reiterado a lo largo del tiempo la conformidad con la información otorgada por mi poderdante y con el vínculo jurídico válidamente suscrito con la misma (Necesidad de aplicar los actos propios de la demandante).
- ✓ **Oportuna:** Lo que implica que la información deberá ser transmitida en los momentos previstos para ello. Aspecto que también se cumplió por parte de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, ya que durante el tiempo en que ha estado afiliada con mi representada, a la Demandante se le ha brindado la información que necesita saber sobre el RAIS, y sobre su situación pensional acorde al caso. Además, consta en la base de datos de mi representada que



mensualmente eran remitidos los extractos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, por lo tanto, las afirmaciones contenidas en el escrito de la Demanda respecto de la información no aportada por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., carecen de sustento fáctico y jurídico.

En este contexto, es menester poner de presente, sin perjuicio de lo que antecede que, en todo caso, la valoración de la información entregada a la luz de los intereses particulares de cada afiliado y su comparación con otras alternativas que ofrece el mercado, escapan del alcance del Deber de Información aplicable al momento en que tuvo lugar el traslado de la Demandante de acuerdo con las normas vigentes para ese lapso, más aún cuando el estudio de conveniencia en relación con otras alternativas de negocio le compete exclusivamente al receptor de la información. Al respecto, la doctrina ha explicado:

*"(...) al determinar el contenido del deber de información durante las negociaciones se debe decir, antes que nada, que ese deber no se relaciona con la conveniencia del contrato, sino con circunstancias objetivas que lo pueden hacer inválido, ineficaz o inútil [...]. **El deber de información no puede comprender la conveniencia del negocio, toda vez que la mayor o menor conveniencia, es decir, el mayor o menor provecho del negocio, está dentro del juego normal de la contratación. Cada cual tiene la carga de valorar, por sí mismo, la conveniencia del contrato que celebra, y así, soportar el riesgo de una valoración equivocada (...)**"⁶. (Destacado fuera del texto original). }*

Admitir lo contrario, supondría, por una parte, aplicar retroactivamente las normas que se expidieron con posterioridad al 2003 y, por la otra, darle al Deber de Información el contenido propio del deber de buen consejo (carga jurídica sustancialmente diferente y no susceptible de ser confundida).

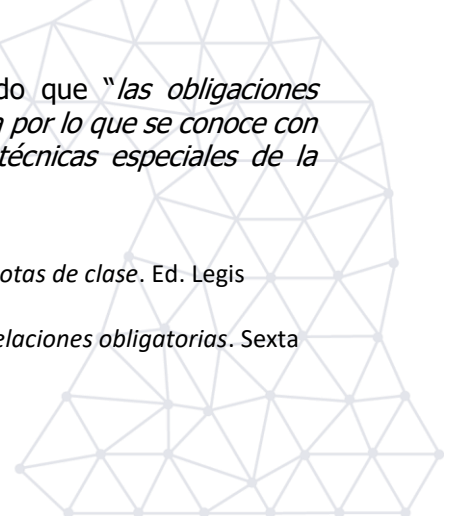
Finalmente, se debe resaltar que la doctrina nacional ha precisado que quien alega el incumplimiento de una obligación de medio tiene la carga de acreditarlo; por lo que en este caso deberá analizarse si las Administradoras del RAIS desplegaron diligentemente todos los comportamientos que le eran exigibles.

Bajo este contexto y como se anunció, habrá de estudiarse si la conducta desplegada por mi poderdante se enmarca dentro de los estándares de comportamiento que hubiese adoptado un profesional en la materia, puesto en las mismas circunstancias de la mencionada AFP.

En relación con esta pauta de comportamiento se ha señalado que *"las obligaciones profesionales determinan una especial regla de diligencia, definida por lo que se conoce con el nombre de lex artis, que es el conjunto de los saberes o técnicas especiales de la profesión"*⁷.

⁶ Bianca, Cesare Massimo. Citado por: Cárdenas Mejía, Juan Pablo. *Contratos. Notas de clase*. Ed. Legis Editores S.A. Bogotá (2021). Pág. 117.

⁷ Díez-Picazo, Luis. *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen II, Las relaciones obligatorias*. Sexta Edición. Ed. Civitas & Thomson Reuters. (2008). Pág. 283.



En el escenario expuesto, podemos afirmar que **SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** actuó con la debida diligencia, según su *lex artis*, en la medida en que:

- Acreditó su calidad especial y conocimiento técnico y profesional en el manejo del régimen de ahorro individual pues se le otorgó licencia de funcionamiento a través de la Resolución S.B.2484 del 22 de diciembre de 1998, tal como se observa en el certificado de existencia y representación legal emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia adjunto a la presente contestación, es decir, **SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** ejecutó todas las actuaciones necesarias tendientes a acreditar su especial conocimiento en la materia, lo cual concluyó con la aprobación para el ejercicio de esta actividad por parte de la autoridad gubernamental correspondiente.
- Acató y actuó en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes para el momento en que se efectuó el traslado de régimen pensional que nos tañe. Este aspecto es aún más evidente si se considera que **SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, para la fecha objeto de estudio (traslado de régimen), no fue objeto de requerimientos, sanciones o multas en lo relacionado con su conducta en el marco del “Deber de Información” por parte de entes de control que permitieran inferir un comportamiento contrario a la ley (Principio constitucional de Confianza Legítima).
- No ha recibido por parte de la señora demandante solicitudes, quejas o reclamaciones en relación con la información entregada y manifestación de vinculación a esta administradora de pensiones antes del 2021, es decir, **SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** por un lapso superior a veinte años, permaneció en la plena convicción de haber actuado conforme a la norma y a los intereses de la demandante. (Necesidad de aplicación de los Actos Propios de la demandante).
- Cumplió con su deber de administrar los recursos pensionales de la demandante en la medida que generó y sigue generando las rentabilidades exigidas por la norma e incluso aseguró una mesada pensional que disfrutó la demandante desde el 1 de julio de 2019, conforme los lineamientos del régimen de ahorro individual.

De este modo, ha quedado debidamente acreditado que mi representada, además de cumplir con el Deber de Información que le era exigible para el momento en que sucedieron los hechos que se analizan en este proceso judicial, adicionalmente acreditó dicha obligación conforme a la *lex artis* que le es predicable, sin que obre un solo elemento de prueba en este trámite que permita colegir lo contrario, más aún, derivándose esa probidad de actuación de mi poderdante en el actuar reiterado y uniforme de la demandante que, sólo hasta ahora, después de más de veinte años, viene sorpresivamente a sostener lo opuesto sin acompañar prueba alguna en ese sentido.

C. LA DIFERENCIA DEL VALOR DE LA MESADA PENSIONAL ENTRE EL RPM Y EL RAIS NO CONSTITUYE LUCRO CESANTE O DAÑO INDEMNIZABLE PRESUNTAMENTE PADECIDO POR LA ACTORA.



Con fundamento en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, tradicionalmente se ha reconocido que los perjuicios patrimoniales comprenden dos modalidades: el daño emergente y el lucro cesante. Según lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, el lucro cesante ha sido entendido como "la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, 'está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho' (CSJ SC de 7 de mayo de 1968)".

Sin embargo, el daño que eventualmente podrían sufrir los pensionados no corresponde precisamente a la disminución de un ingreso, como se plantea en la sentencia SL373-2021, pues acoger esta tesis supone, por una parte, desconocer las diferencias que existen entre el RAIS y el RPM, particularmente en lo que respecta a la lógica económica que subyace a cada uno, y, por otra, eliminar en la práctica el RAIS.

En cuanto a lo primero, se ha señalado que el RPMPD se caracteriza porque la entidad administradora calcula la cotización a pagar como una prima promedio aplicable al conjunto de la población asegurada, de manera que la cotización pueda cubrir efectivamente las erogaciones por concepto de pensiones. (...) El régimen pensional de prima media es de «prestación definida» en el sentido de que no deja al azar la cuantificación de las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones, sino que las define previamente en la ley. Por eso en este régimen, la ley define con exactitud el número mínimo de semanas que se exige para reconocer la pensión, las edades a partir de las cuales las reconoce y la cuantía de la pensión".

Por su parte, el RAIS opera sobre la base de la acumulación de capital en una cuenta de ahorro particular de cada afiliado, de manera que la pensión se causa cuando se cumple con la condición de que se reúna en la cuenta individual el capital requerido para financiarla, y, al materializarse los restantes requisitos, la cuantía de la pensión es proporcional a las sumas acumuladas. Sobre la financiación de estas pensiones, la doctrina especializada señala que la "cotización hace el papel de la cuota de un ahorro que se destina a la capitalización de la pensión. En consecuencia, existirá una relación directa entre la cantidad cotizada y la expectativa de pensión: a mayor cotización mayor posibilidad de pensión y viceversa. (...) Como sistema de capitalización, el régimen garantiza el beneficio, es decir, la pensión, únicamente con el cumplimiento de la condición de reunir en la cuenta individual el capital que financie la pensión (...)". En consecuencia, no resulta admisible calificar como "daño" la diferencia en los montos pensionales, comoquiera que es claro que no es posible equiparar la mesada pensional en uno y otro régimen, dadas las particularidades de cada uno.

Si bien la actora argumenta que el daño se constituye en el supuesto incumplimiento del Deber de Información por parte de las AFP, puesto que supuestamente se vio privado de decidir libremente a qué régimen pensional quería vincularse, al no haber recibido, según su dicho no probado, información suficiente y oportuna y, por tanto, tomando una decisión "desinformada".



Empero, como ha quedado demostrado, no hay ningún daño, sólo las diferencias propias, consagradas en la Ley, entre ambos regímenes pensionales.

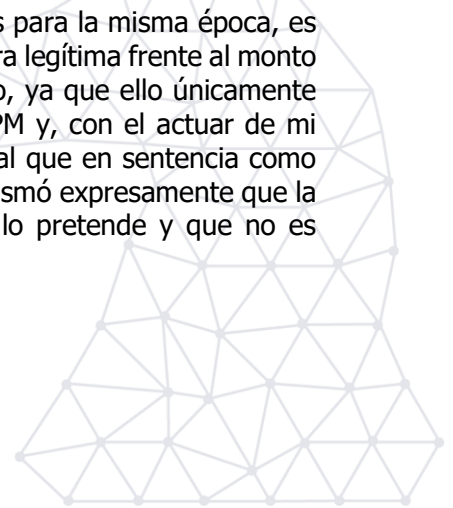
Resulta también pertinente traer a colación lo preceptuado por el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que establece que: *“una vez efectuada la selección inicial, estos [los afiliados] sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”*.

En consecuencia, además de lo previamente explicado, durante la vigencia del traslado al RAIS, el afiliado contaba con la posibilidad de cambiar nuevamente de régimen, siempre que hubieran transcurrido cinco (5) años desde su traslado al RAIS y que le faltaran más de diez años para cumplir con la edad de pensión. El término de cinco (5) años para el traslado era suficiente para identificar que supuestamente su consentimiento no había sido libre, porque contaba con elementos de juicio adicionales: los extractos que periódicamente le remitía la AFP, los canales de atención para elevar consultas, y demás actos de relacionamiento que obtuvo la demandante durante toda su vigencia de afiliación, esto sin tener en cuenta si realizó traslados horizontales entre distintas AFP del régimen RAIS.

Es claro entonces que el retorno al RPM era una prerrogativa que la demandante podía ejercer, incluso durante la vigencia de su afiliación al RAIS y sólo él podía decidir si la hacía efectiva o no según sus intereses.

Así las cosas, está probado que, además de no existir un incumplimiento al Deber de Información por parte de mi representada, tampoco sufrió la demandante ningún daño, pues su pensión le fue reconocida según los parámetros vinculantes consagrados por el mismo legislador en la Ley 100 de 1993, propios del RAIS que libremente escogió la demandante, y del que, aun pudiéndose trasladar, nunca lo hizo, a pesar de contar con todo tipo de información y elementos de juicio al respecto.

En síntesis, acorde a lo dispuesto en la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, bajo el radicado 05001 31 05 001 2019 00465 01, lo primero que se debe validar por el operador judicial, en los casos donde se pretenden perjuicios, es la materialización o no de un daño, para luego verificar los demás elementos de la responsabilidad civil. Acorde a ello, me permito indicar al despacho que, al validar la edad del trabajador al realizar el traslado de régimen y la densidad de tiempo de servicios o semanas cotizadas para la misma época, es claro que el hoy demandante no contaba con una expectativa ni siquiera legítima frente al monto de su mesada pensional, con lo cual, no se puede hablar de un daño, ya que ello únicamente sería así si la actora hubiera podido acceder a una pensión en el RPM y, con el actuar de mi representada, se hubiera impedido ello y recuerdo al operador judicial que en sentencia como la proferidas bajo el radicado 88001- 3103-002-2005-00031-01, se plasmó expresamente que la plena demostración del perjuicio alegado está en cabeza de quien lo pretende y que no es admisible el daño meramente eventual o hipotético.





3. LA RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS DE LA DEMANDANTE CONTRARÍA EL PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS

Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, señaló que el plazo a partir del cual el afiliado podrá trasladarse de régimen corresponde a 5 años posteriores al traslado, no implica ello que la demandante no hubiese contado con la posibilidad de trasladarse en vigencia de esta disposición, pues desde la entrada en vigencia de esta norma hasta la presentación de la demanda, han transcurrido un poco más de 20 años, teniendo oportunidad durante todo este periodo de realizar el traslado.

Lo anterior implica, que la demandante no puede pretender vía proceso ordinario la reclamación de perjuicios alegando indebida información y disminución del monto de la mesada pensional, cuando está en sí misma contraria sus actuaciones y decisiones en materia pensional, **COMO QUIERA QUE PESE A TENER EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DEVOLVERSE AL RPM LO QUE HIZO FUE PERMANECER EN EL RAIS, MOSTRANDO ASÍ VOLUNTAD DE PERMANECER EN EL RAIS.**

En este punto se debe traer en cuenta la doctrina de los actos propios desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia SC10895 de 2015, haciendo alusión a sentencia 2006-00041-01 de 2013, señaló:

"Inocultable es, por lo tanto, la importancia de actuar con sujeción a los postulados que se derivan del principio general de la buena fe, pues sólo así es posible 'la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo', que a voces del artículo 2º de la Constitución Política son, entre otros más, fines del Estado Social del Derecho.

*(...) Con fundamento en el comentado principio, se ha estructurado la 'doctrina de los actos propios' -venire contra factum proprium non valet-, conforme a la cual, en líneas generales, **con fundamento en la buena fe objetiva existe para las personas el deber de actuar de manera coherente, razón por la cual ellas no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores relevantes y eficaces, específicamente si con tales comportamientos se generó una expectativa legítima en los otros sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial**". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

Así mismo se indicó en la sentencia SL2439 del 15 de junio de 2021,

"El ad quem concluyó que tal deber fue satisfecho por la demandada, además de que en el presente caso resulta importante resaltar que se presentaron los denominados «actos de relacionamiento», los cuales en la sentencia CSL SL413-2018, definió de la siguiente manera:

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves,



por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

Es que la señora Hoyos Aristizábal se trasladó de Porvenir a Old Mutual, ello quiere significar que comprendía las características propias del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues su interacción en él fue de tal manera que buscó aprovechar los beneficios que le ofrecía.

Por lo que la recurrente no logró desvirtuar, ni con argumentos fácticos ni jurídicos, la doble presunción de legalidad y acierto con la que cuenta la sentencia de atacada. Además, acudió a manifestaciones genéricas que se constituyen más bien en alegatos de instancia, como lo apuntó la réplica, ajenos al propósito del recurso de casación, que es, precisamente, confrontar la sentencia acusada con la ley y no con la jurisprudencia como lo hizo en el sub lite."

Quedando claramente demostrado a través de la conducta de la demandante que su intención fue pertenecer al R.A.I.S., sin que realizará actuación alguna que permita inferir su intención de retornar al RPM, máxime cuando se trasladó entre AFP del R.A.S.I.

4. AUN CUANDO HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE NO HUBO DAÑO, EN SUBSIDIO SE DEBE TENER LA CONDUCTA NEGLIGENTE DE LA DEMANDANTE, COMO FACTOR QUE INFLUYÓ CAUSALMENTE EN LA PRODUCCIÓN DEL SUPUESTO PERJUICIO QUE SE ALEGA, MOTIVO POR EL CUAL SE CONFIGURA EL HECHO DE LA VICTIMA

El surgimiento de la obligación indemnizatoria puede verse como la verificación de la relación causa y efecto que existe entre la conducta de las Administradoras de Fondos de Pensiones y el supuesto daño que aquí se alega. Lo anterior implica que, para que las Administradoras de Fondos de Pensiones se vean comprometidas, debe acreditarse que por la falta de información se generó el daño reclamado por la demandante; circunstancia que, como se demostró, no tiene fundamento fáctico ni jurídico. El sustento normativo de este requisito se encuentra, en primera medida, en el artículo 1616 del Código Civil colombiano el cual expone:

"Artículo 1616. Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios *Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios **que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento**".* (Subrayado fuera del texto).

A su vez, el artículo 2341 *ibidem* prescribe:

"Artículo 2341. Responsabilidad extracontractual *El que ha cometido un delito o culpa, **que ha inferido daño a otro**, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de*



la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido". (Subrayado fuera del texto).

En este orden de ideas, de conformidad con las normas citadas, **únicamente será obligada a la reparación del daño la persona a la que le sea causalmente imputable el daño, es decir, aquel por cuya conducta activa u omisiva se ha producido el perjuicio padecido por la víctima.**

Entonces, para la valoración del nexo causal como requisito del surgimiento de la obligación indemnizatoria, la jurisprudencia civil ha desarrollado distintas teorías que tienen por objeto determinar cuál de los distintos antecedentes (hechos u omisiones) que concurren a la producción de un daño tiene la categoría de Causa Jurídica del mismo; a lo cual ha denominado como *Juicio de Imputación Causal*.

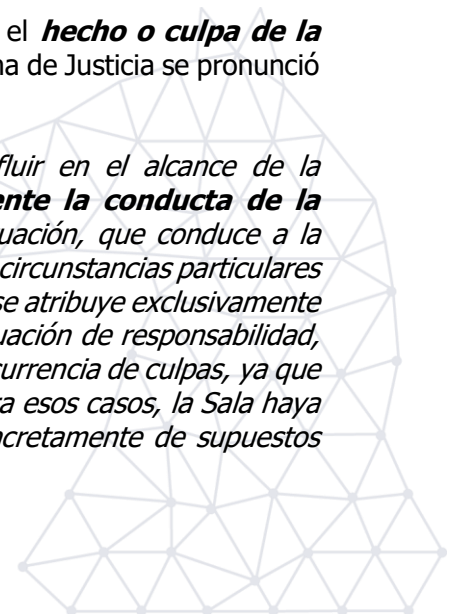
Actualmente, la tesis prevaleciente es la denominada por la Corte Suprema como la *Causalidad Adecuada*, según la cual será causa del daño, el antecedente que resulte ser el más idóneo para producir una determinada consecuencia. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia de 26 de septiembre de 2002. Rad. No. 6878. M.P. Jorge Santos Ballesteros, manifestó:

*"(...) de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más 'adecuado', **el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo**". (Subrayado fuera del texto).*

Ahora bien, durante el desarrollo de los negocios jurídicos se presentan circunstancias de la naturaleza, hechos de terceros, o, incluso, la conducta del supuesto damnificado que concurren en la producción del daño. Así, cuando concurren estas circunstancias se configura la denominada "*Causa Extraña*" y, de acuerdo con ello se debe proceder a exonerar al imputado por la ausencia de nexo causal entre el presunto daño y su actuación.

Como se afirmó, una de las denominadas "*Causas Extrañas*" es el ***hecho o culpa de la víctima***, sobre la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en los siguientes términos:

*"Tratándose de la actividad de la víctima, ésta puede influir en el alcance de la responsabilidad ***haciendo irrelevante total o parcialmente la conducta de la persona a quien se hace la imputación.*** La primera situación, que conduce a la exoneración total, se presenta cuando esa actividad, dadas las circunstancias particulares de cada caso, rompe la relación de causalidad porque el daño se atribuye exclusivamente a la culpa de la víctima. El segundo evento implica una atenuación de responsabilidad, por la aparición de concausas, pues lo que sucede es una concurrencia de culpas, ya que al lado del victimario confluye la de la víctima. De ahí que para esos casos, la Sala haya dicho, que mediando pluralidad de causas 'y si se trata concretamente de supuestos*





*donde en este plano concurren el hecho ilícito del ofensor y la conducta de la víctima, fundamental es establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del menoscabo, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: **Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado a otro.** (...)" (Subrayado fuera del texto).*

Es claro, entonces, que la conducta de la *víctima* sea positiva o negativa, puede tener incidencia causal en la generación del perjuicio. En algunas ocasiones, su comportamiento –el de la víctima- pueda ser causa exclusiva del daño que ha padecido.

Bajo este escenario, solicito, respetuosamente, al Despacho que, si eventualmente llegara a establecer la existencia de un supuesto daño, pese a que no hay ninguna prueba de ello, en todo caso, tenga en cuenta que la demandante adoptó una conducta pasiva, casi desinteresada en lo que respecta a sus propios intereses, pues contando con todo tipo de información y pudiéndose trasladar de régimen pensional no lo hizo y, por tanto, la diferencia en su mesada que hoy alega, es sólo producto directo de su actuar libre e informado, por lo cual si esto se considera imprudentemente como un daño, la causación del mismo es exclusivamente imputable al actuar reiterado de la demandante.

Ahora bien, cabe aclarar que, de acuerdo con la jurisprudencia civil, aunque se alude a la expresión "*culpa de la víctima*", en realidad "*corresponde -más precisamente- a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no sólo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño*".

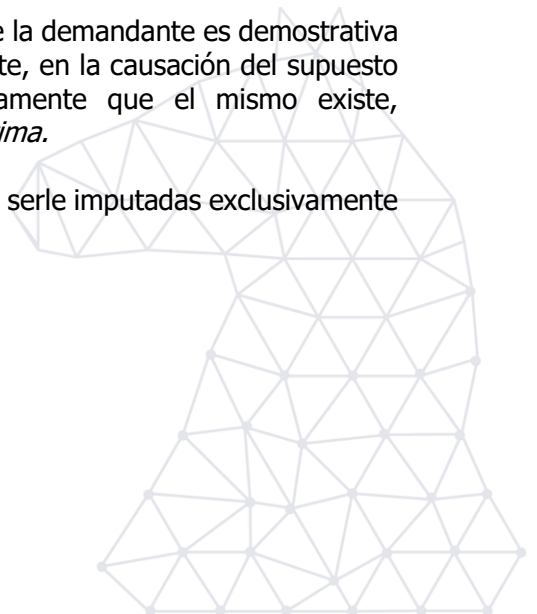
Por casi veinte años desde el traslado de régimen pensional, el afiliado ha guardado silencio en relación con su declaración de voluntad. En este sentido, la inercia de la demandante demuestra su conformidad con el régimen pensional libremente seleccionado y con el hecho de mantenerse en el mismo a lo largo del tiempo, hasta obtener su pensión en éste, con lo cual, si es que de ahí se puede predicar un daño, ese perjuicio sólo se puede atribuir al actuar de la demandante.

De todo lo expuesto es posible determinar que la inercia de la demandante es demostrativa de un comportamiento que influye, directa y exclusivamente, en la causación del supuesto daño que alega, si es que se puede sostener válidamente que el mismo existe, configurándose, por tanto, el denominado *Hecho de la Víctima*.

Así, las consecuencias que se derivan de su omisión pueden serle imputadas exclusivamente a él.

IV. EXCEPCIONES PREVIAS

A. FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA





Se presenta este medio exceptivo de acuerdo con lo señalado en el numeral 1º del artículo 100 de Código General del Proceso, en la medida en que lo pretendido por la parte actora es el reconocimiento y pago de perjuicios, consistente según el, en el mayor valor generado entre el valor de la mesada pensional reconocida en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el que le correspondería si hubiese estado en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora mediante la interposición del presente pleito corresponde a una indemnización que no es de naturaleza laboral, y por ende la reclamación efectuada no corresponde a ninguna de las competencias que la ley atribuye a la jurisdicción ordinaria laboral de acuerdo con lo que prevé el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, y dada la naturaleza de la reclamación planteada en este proceso, la competencia para su conocimiento y trámite es de la jurisdicción civil, y así deberá declararse por parte de este despacho.

"ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. *<Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*

- 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.*
- 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.*
- 3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.*
- 4. <Numeral modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.*
- 5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.*
- 6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.*
- 7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.*
- 8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.*
- 9. El recurso de revisión.*
- 10. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 1210 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo".*



b) PRESCRIPCIÓN DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS

La presente excepción se propone de conformidad con el artículo 32 del CPTSS.

El artículo 488 CST prescribe:

"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."

El término de prescripción de la acción debe contarse a partir del momento en que el afiliado adquiere la condición de pensionado en el RAIS, así lo ha considerado la CSJ, en sentencia SL 373 de 2021, al señalar *"En la medida en el que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el termino de prescripción debe iniciar a contar desde este momento."*

Más aún llegados a este punto es importante citar la Sentencia del Tribunal Superior de Tunja de radicado: 15001-31-05-003-2019-00409-02, con ponencia de la Doctora MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ, donde se acota lo siguiente:

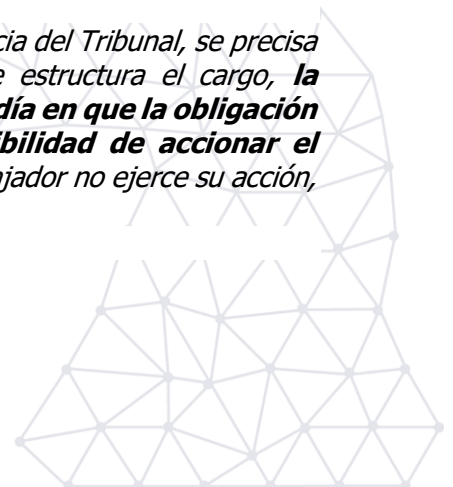
"(...)de conformidad con los artículos 488 del C.S.T. y 151 del CPTSS, las acciones derivadas de los derechos laborales prescriben en tres años contados a partir del momento que la obligación se ha hecho exigible y puede interrumpirse conforme al artículo 489 del CST: extrajudicialmente, mediante la reclamación escrita del trabajador al empleador acerca de sus derechos; y la judicial, con la presentación de la demanda, en los términos y condiciones señaladas en el artículo 94 del Código General del Proceso, aplicable al caso por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo."

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en la Sentencia SL10209 del 11 de julio de 2017, señaló:

"El tópico que corresponde en esta oportunidad resolver, se centra en establecer si el término prescriptivo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe contarse o no desde que el derecho se hace exigible, esto es a partir de la sentencia constitutiva o desde la fecha (sic)

*Para dar respuesta al reproche que se realiza contra la sentencia del Tribunal, se precisa que según los términos de los artículos sobre los que se estructura el cargo, **la prescripción extintiva comienza a contarse a partir del día en que la obligación se hace exigible, es decir, desde que exista la posibilidad de accionar el cumplimiento de la obligación**, por manera que, si el trabajador no ejerce su acción, debe soportar la consecuencia de que su derecho prescriba"*

La misma Corporación en la Sentencia SL373 de 2021 concluyó:





"El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.

Es decir, Contrario al derecho pensional los perjuicios son prescriptibles si no se reclaman oportunamente, como ocurre en el asunto que se examina, pues importante anotar que, la accionante radicó demanda el pasado **30 de agosto de 2023**, tal y como consta en la consulta de la Rama Judicial:

05 Sep 2023	PERSONAL	MINISTERIO PUBLICO.DSL			05 Sep 2023
05 Sep 2023	NOTIFICACIÓN PERSONAL	COLPENSIONES.DSL			05 Sep 2023
05 Sep 2023	NOTIFICACION AGENCIA NACIONAL	DSL			05 Sep 2023
05 Sep 2023	NOTIFICACIÓN PERSONAL	MINISTERIO PUBLICO.DSL			05 Sep 2023
31 Aug 2023	FIJACION ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 31/08/2023 A LAS 17:14:58.	01 Sep 2023	01 Sep 2023	31 Aug 2023
31 Aug 2023	AUTO ADMITE DEMANDA	Y ORDENA NOTIFICAR. JRN			31 Aug 2023
30 Aug 2023	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 30/08/2023 A LAS 13:45:36	30 Aug 2023	30 Aug 2023	30 Aug 2023

Imprimir

En el mismo sentido, y como se encuentra documentalmente probado la señora **NURY FABIOLA GARZON BUSTOS** ostenta la calidad de pensiona desde el **pasado 14 de febrero de 2017**.

20/09/2023 10:14

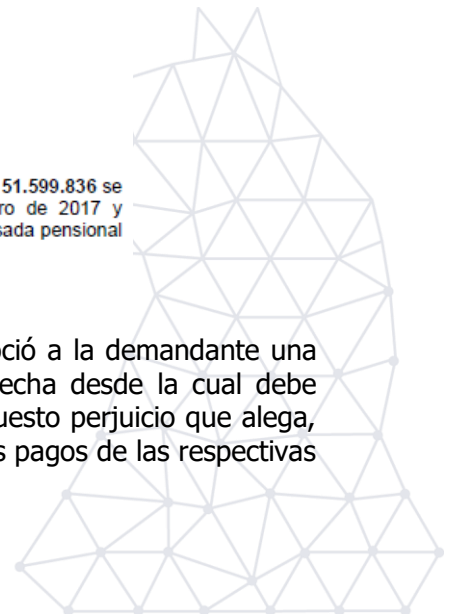
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

NURY FABIOLA GARZON BUSTOS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **51.599.836** se le aprobó la **SOLICITUD POR VEJEZ NORMAL** a partir del 14 de Febrero de 2017 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado con una mesada pensional por \$1,160,000.00.

La presente certificación se expide el 20 de septiembre de 2023.

Es así como, en el presente caso la AFP **PORVENIR S.A.** le reconoció a la demandante una mesada pensional por vejez a partir del 14 de febrero de 2017, fecha desde la cual debe entenderse que el accionante tuvo la oportunidad de conocer el supuesto perjuicio que alega, pues desde esta fecha adquirió la calidad de pensionado, así como los pagos de las respectivas





mesadas pensionales. Luego, tal como lo ha dicho la H. Corte Suprema, la prescripción de la acción de reparación del perjuicio debe contarse a partir del momento en que se adquiere la condición de pensionado en el Régimen de Ahorro Individual, en este sentido cualquier perjuicio que logre probarse en el presente **proceso ya se encuentra prescrito**.

Como quiera que desde el reconocimiento de pensión esto es desde el 14 febrero de 2017 al 30 de agosto de 2023 fecha de radicación de la demanda han transcurrido **6 años, 6 meses y 16 días**.

V. EXCEPCIONES DE FONDO

A. IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE PRESENTE Y FUTURO

Se formula esta excepción con ocasión a lo dispuesto en la sentencia que al citar la sentencia SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n.º 6879 indicó:

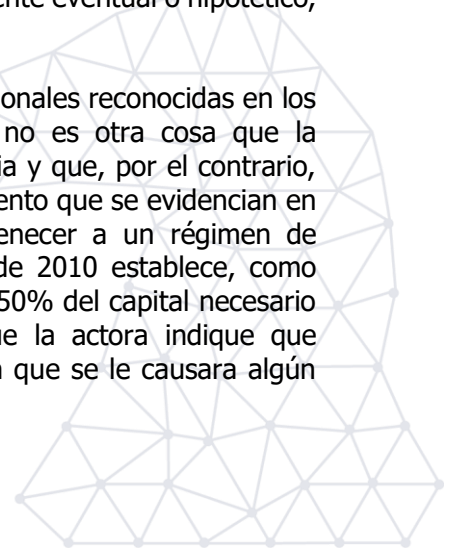
"Todo daño, para que sea indemnizable, 'debe ser 'directo y cierto' y no meramente 'eventual o hipotético', esto es, que se presente como consecuencia de la 'culpa' y que aparezca 'real y efectivamente causado'"

Acorde a lo anterior y más tratándose de ganancias dejadas de percibir, es imperativo indicar que se requiere una certeza frente al detrimento, es decir, una plena acreditación del detrimento y que su verdad, existencia u ocurrencia sea tangible, incontestable o verosímil y se recuerda que para el caso en concreto dicha carga de la prueba incumbe exclusivamente al extremo activo, como se predica en la sentencia previamente enunciada.

Ergo, en aras de validar la procedencia del perjuicio pretendido, es imperativo realizar un juicio de probabilidad objetiva, de cara siempre a la exigencia de una prueba concluyente que permita determinar no solo la entidad de los mismos, sino su extensión cuantitativa, con lo cual, toda conclusión dudosa o contingente debe ser vedada inmediatamente.

Acorde a lo anterior, reitero al despacho que, para el momento del traslado, la actora tenía cerca de 35 años, un salario cercano al 10% del que devengó los últimos diez años de cotizaciones y una densidad de semanas cercana a las 700, con lo cual, es claro que la actora no tenía ni siquiera una expectativa legítima de obtener la mesada pensional que pretende, al momento del traslado, con lo cual, es notorio que está acudiendo a un daño meramente eventual o hipotético, en tanto no era altamente factible que lo hoy pretendido acaeciera.

Por otro lado, reitero que la simple diferencia entre las mesadas pensionales reconocidas en los regímenes pensionales, no se erige como un daño, ya que ello no es otra cosa que la materialización de las disposiciones normativas que regulan la materia y que, por el contrario, es imperativo que el operador judicial, valide los actos de relacionamiento que se evidencian en este caso y puntualmente que la actora en el 2009 solicitó pertenecer a un régimen de capitalización y dado que el artículo 2.32.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 establece, como requisitos para ello, el contar con un capital ahorrado equivalente al 50% del capital necesario para financiar una pensión mínima o el 100%, resulta ilógico que la actora indique que desconocía las características y/o condiciones del RAIS y menos aún que se le causara algún





tipo de perjuicio. Lo anterior, en el entendido de que no es una decisión que se pueda tomar de forma apresurada, en el entendido de que, tan solo cuatro meses antes, la actora contaba con 52 años y dado que el propio demandante aporta proyecciones que presuntamente elaboró SKANDIA en marzo de 2009, con lo cual, ello requirió no solo solicitudes previas, sino también un debido análisis producto lógico de la teoría de los actos propios.

B. COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

En la medida en la que la afiliación de la demandante al RAIS cuenta con plena validez, al llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, mi representada no se encuentra en obligación de acceder a las peticiones de la demanda.

C. INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS

Como quiera que la parte actora no logra acreditar que haya existido ausencia de información o se le haya privado de alguna forma en su libertad de escogencia de régimen pensional, no existe ningún daño indemnizable que deba ser reparado por mi representada; máxime, al considerar que las obligaciones contraídas por las administradoras del RAIS son de medios y no de resultados.

D. PRESCRIPCIÓN

Sin que se reconozca derecho alguno a favor de la parte demandante, propongo la excepción de prescripción frente a todos aquellos derechos que eventualmente hayan perdido oportunidad de discusión y exigibilidad por el simple pasar del tiempo.

Tenga en cuenta señor Juez que el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo establece un término específico y especial para efectos de la prescripción en materia laboral, el cual a la letra reza lo siguiente:

"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en la Sentencia SL10209 del 11 de julio de 2017, señaló:

"El tópico que corresponde en esta oportunidad resolver, se centra en establecer si el término prescriptivo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe contarse o no desde que el derecho se hace exigible, esto es a partir de la sentencia constitutiva o desde la fecha (sic)

Para dar respuesta al reproche que se realiza contra la sentencia del Tribunal, se precisa que según los términos de los artículos sobre los que se estructura el cargo, la



prescripción extintiva comienza a contarse a partir del día en que la obligación se hace exigible, es decir, desde que exista la posibilidad de accionar el cumplimiento de la obligación, por manera que, si el trabajador no ejerce su acción, debe soportar la consecuencia de que su derecho prescriba”

La misma Corporación en la Sentencia SL373 de 2021 concluyó:

“El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.

En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, **el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento.”**

Contrario al derecho pensional los perjuicios son prescriptibles si no se reclaman oportunamente, como ocurre en el asunto que se examina, pues la demandante radicó demanda el 05 de septiembre de 2023, y como se encuentra plenamente probado documentalmente la pensión fue reconocida el pasado mes de agosto de 2016.

E. BUENA FE

Sin que signifique reconocimiento alguno en favor de la parte Demandante, y de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política, es preciso recordarle al Despacho que Skandía siempre ha obrado de buena fe, atendiendo a las imposiciones normativas vigentes para cada momento de su actividad; motivo por el cual es improcedente imponer cualquier tipo de condena desfavorable para sus intereses.

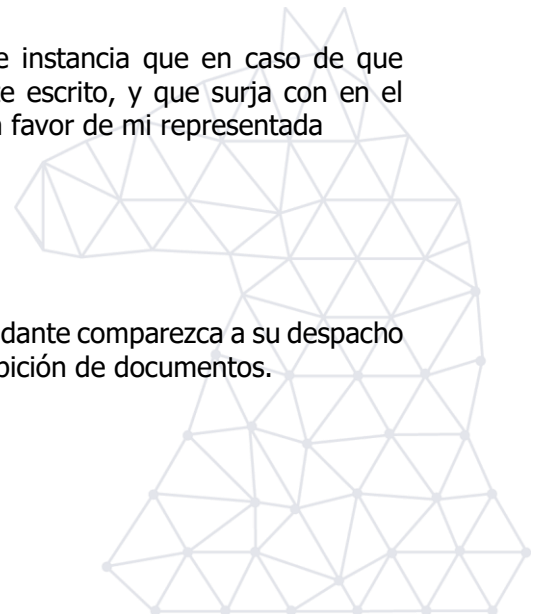
F. GENÉRICA

De la manera más cordial y respetuosa le solicito al Juez de instancia que en caso de que encuentre alguna excepción no formulada dentro del presente escrito, y que surja con en el desarrollo del proceso, la misma sea observada y decretada en favor de mi representada

VI. PRUEBAS

1. Interrogatorio de parte.

Solicito a la señora Juez que fije fecha y hora para que la demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé con exhibición de documentos.



2. Documentales:

- 2.1. Certificado de traslado RAIS.
- 2.2. Estado de cuenta.
- 2.3. Historial de vinculaciones SIAFP.
- 2.4. Historia laborales de afiliados SIAFP.

VII. ANEXOS

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura pública No. 721, por medio de la cual **SKANDIA S.A.** da poder a **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**
2. Copia simple del certificado de existencia y representación legal de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S., en donde me encuentro inscrito como abogada.
3. Copia simple de cedula de ciudadanía del suscrito y licencia temporal de abogada.
4. Los documentos relacionados en el respectivo acápite de pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES.


Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la Calle 84 A # 10-33, pisos 5 y 11 Edificio Torre La Cabrera de la ciudad de Bogotá D.C., y en los correos electrónicos notificaciones@godoycordoba.com y dgomez@godoycordoba.com.

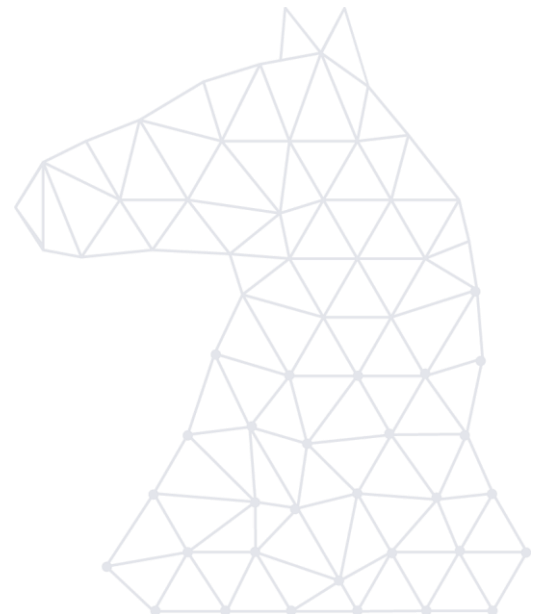
IX. TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES.

En esta oportunidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 y en el numeral 14 del art. 78 del CGP, se remite el presente memorial con copia a las partes:

- Parte demandante: procesos@tiradoescobar.com

Del Señor Juez,


DIANA ESPERANZA GÓMEZ FONSECA
C.C. 1.023.967.512 de Bogotá D.C.
L.T. 30.201 del C. S de la J.
Correo electrónico: dgomez@godoycordoba.com





SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.
Nit. 800.148.514-2

CERTIFICA

Que NURY FABIOLA GARZON BUSTOS identificado(a) con C.C. 51599836 estuvo afiliado(a) a Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias con el número de contrato **700000589502** desde el 01 de mayo de 2003 hasta el 31 de mayo de 2005.

El día 21 de junio del 2005 se realizó un traslado hacia PORVENIR S.A de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Cotización Obligatoria	\$26,203,672.87
Mora	\$0
COTIZ. VOLUNT. AFILIADO	\$0
Cotización Voluntaria Empresa	\$0
Fondo de Garantía de Pensión Mínima	\$0
TOTAL COTIZACIÓN	\$26,203,672.87

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá el 09 de noviembre de 2023.

Si desea información adicional, con gusto será atendida en nuestro Contact Center escribiendo a cliente@skandia.com.co o llamando al 6584000 en Bogotá, y a la línea 01 8000517526 a nivel nacional.

Cordialmente,

Oscar Mauricio Ortiz Bedoya
Analista de Servicio al Cliente

Estado de cuenta Skandia Fondos de Pensiones Obligatorias

NURY FABIOLA GARZON BUSTOS
DGL 152 N°48 75 INT 6 APTO 104
BOGOTA D.C., BOGOTA

C. 51599836

CUENTA INDIVIDUAL No.:

700000589502

FECHA AFILIACIÓN:

01/05/2003

FECHA ELABORACIÓN:

09/11/2023

NIT EMPLEADOR	EMPLEADOR / CONCEPTO	PERÍODO	DÍAS	I.B.C	Movimientos Cuenta Individual				MORA	DESCUENTOS			TOTAL MOVIMIENTOS	F.S.P
					OBLIGATORIO	RENDIMIENTO OTROS FONDOS	VOLUNTARIO AFILIADO	VOLUNTARIO EMPRESA		FGPM	COMISIÓN	SEGURO		
N. 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDO / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS DEL FONDO	200304			14,952,571	0	0	0	0	0	0	0	14,952,571	0
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200305	30	1,570,000	212,000	0	0	0	0	7,850	22,105	24,994	157,051	15,700
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200306	30	1,570,000	211,900	0	0	0	0	7,850	22,105	24,994	156,951	15,700
N. 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDO / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS DEL FONDO	200306			163,148	0	0	0	0	0	0	0	163,148	0
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200307	30	1,570,000	211,900	0	0	0	0	7,850	22,105	24,994	156,951	15,700
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200308	30	1,570,000	211,900	0	0	0	0	7,850	22,105	24,994	156,951	15,700
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200309	30	1,570,000	211,900	0	0	0	0	7,850	22,105	24,994	156,951	15,700
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200310	30	1,620,000	218,700	0	0	0	0	8,100	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200311	30	1,620,000	218,700	0	0	0	0	8,100	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200312	30	1,620,000	218,700	0	0	0	0	8,100	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200401	30	1,620,000	234,900	0	0	0	0	24,300	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200402	30	1,620,000	234,900	0	0	0	0	24,300	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200403	30	1,620,000	234,900	0	0	0	0	24,300	22,809	25,790	162,001	16,200
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200404	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200405	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200406	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200407	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200408	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APORTE OBLIGATORIO	200409	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800

Estado de cuenta Skandia Fondos de Pensiones Obligatorias

NURY FABIOLA GARZON BUSTOS
DGL 152 N°48 75 INT 6 APTO 104
BOGOTA D.C., BOGOTA

C. 51599836

CUENTA INDIVIDUAL No.:

700000589502

FECHA AFILIACIÓN:

01/05/2003

FECHA ELABORACIÓN:

09/11/2023

NIT EMPLEADOR	EMPLEADOR / CONCEPTO	PERÍODO	DIAS	I.B.C	Movimientos Cuenta Individual				MORA	DESCUENTOS			TOTAL MOVIMIENTOS	F.S.P
					OBLIGATORIO	RENDIMIENTO OTROS FONDOS	VOLUNTARIO AFILIADO	VOLUNTARIO EMPRESA		FGPM	COMISIÓN	SEGURO		
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200410	30	1,680,000	243,600	0	0	0	0	25,200	23,654	26,745	168,001	16,800
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200411	30	1,788,000	259,300	0	0	0	0	26,820	25,175	28,464	178,841	17,900
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200412	30	1,740,000	252,300	0	0	0	0	26,100	24,499	27,700	174,001	17,400
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200501	30	1,740,000	261,000	0	0	0	0	26,100	24,499	27,700	182,701	17,400
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200502	30	1,740,000	261,000	0	0	0	0	26,100	24,499	27,700	182,701	17,400
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200503	30	1,740,000	261,000	0	0	0	0	26,100	24,499	27,700	182,701	17,400
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200504	30	1,800,000	270,000	0	0	0	0	27,000	25,344	28,656	189,000	18,000
N. 860034813	INTALPEL S A S / APOORTE OBLIGATORIO	200505	30	1,800,000	270,000	0	0	0	0	27,000	25,344	28,656	189,000	18,000
N. 800153836	FONDO DE PENSIONES PORVENIR / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS AL FONDO DE PENSIONES	200506			-26,203,673	0	0	0	0	0	0	0	-26,203,673	0
N. 800153836	FONDO DE PENSIONES PORVENIR / TRASLADO DE APORTES OBLIGATORIOS AL FONDO DE PENSIONES	200508			-197,104	0	0	0	0	0	0	0	-197,104	0
NUMERO DE DIAS COTIZADOS			750											

FONDO	NUMERO DE UNIDADES
Conservador	0.00
Moderado	0.00
Mayor Riesgo	0.00
Retiro Programado	0.00

OBLIGATORIO 0.00
VOLUNT. AFILIADO 0.00
VOLUNT. EMPRESA 0.00
MORA 0.00
SALDO A 09/11/2023: 0.00
RENDIMIENTOS 0.00

El porcentaje de comisión de administración es 2.05 % del IBC, el de seguro es 0.95 % y el de Fondo de Garantía de Pensión Mínima es de 1.50% según lo dispuesto en la ley 797 de 2003 y el decreto reglamentario 510 del mismo año. El porcentaje de FSP es el establecido en las normas citadas. Porcentajes vigentes a la fecha de expedición de este reporte.

**Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. NIT 800.148.514-2
Av. 19 No. 109A-30 Tel 6584000 en Bogotá D.C. y Nacional 01 8000 517 526**

USUARIO: SKOORTIZB06

OSCAR MAURICIO ORTIZ BEDOYA

9 de Noviembre de 2023

[Registrar
servicio](#)

Buscar en Wiki SIAFP 



• Historial de vinculaciones en línea • Usuarios • Afiliados • Pagos • Administrador de Tareas • Estadísticas • Historia Laboral • Actualización de información

Historial de vinculaciones

Hora de la consulta : 10:27:23 AM

Afiliado: CC 51599836 NURY FABIOLA GARZON BUSTOS

Vinculaciones para : CC 51599836

<u>Tipo de vinculación</u>	<u>Fecha de solicitud</u>	<u>Fecha de proceso</u>	<u>AFP destino</u>	<u>AFP origen</u>	<u>AFP origen antes de reconstrucción</u>	<u>Fecha inicio de efectividad</u>	<u>Fecha fin de efectividad</u>
Traslado regimen	1997-01-23	2004/04/16	COLPATRIA	COLPENSIONES		1997-03-01	1998-07-31
Traslado de AFP	1998-06-08	2004/04/16	COLFONDOS	COLPATRIA		1998-08-01	2003-04-30
Traslado de AFP	2003-03-04	2004/04/16	SKANDIA	COLFONDOS		2003-05-01	2005-05-31

3 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 51599836

<u>Fecha de novedad</u>	<u>Fecha de proceso</u>	<u>Código de novedad</u>	<u>Descripción</u>	<u>AFP</u>	<u>AFP involucrada</u>
1997-01-23	1997-02-11	01	AFILIACION	COLPATRIA	
1998-06-08	1998-07-09	79	TRASLADO AUTOMATICO	COLFONDOS	COLPATRIA
2003-03-04	2003-04-07	79	TRASLADO AUTOMATICO	SKANDIA	COLFONDOS

3 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

Imprimir

Regresar

Copyright © 2015 Asofondos. Derechos reservados



USUARIO: SKOORTIZB06

OSCAR MAURICIO ORTIZ BEDOYA

9 de Noviembre de 2023

[Registrar servicio](#)



- Historial de vinculaciones en línea
- Usuarios
- Afiliados
- Pagos
- Administrador de Tareas
- Estadísticas
- Historia Laboral
- Actualización de informac

Historias laborales de afiliados

Tipo y número de identificación
Nombres actuales del afiliado
Total de semanas cotizadas

CC - 51599836
GARZON BUSTOS NURY FABIOLA
428.57

Historia laboral afiliado

Período	Tipo de identificación del aportante	Número de identificación del aportante	Razón social del aportante	Días cotizados	IBC	Fecha de pago	Valor cotización obligatoria	Fondo de Garantía de Pensión Mínima Consolidado	Porcentaje de cotización adicional	Pendiente de procesar	Entidad que reportó	Ver Detalle
1997/02	NI	860034813	INTALPEL S A	30	630,000	1997/03/06	63,001	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/03	NI	860034813	INTALPEL S A	30	630,000	1997/04/04	63,001	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/04	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/05/08	73,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/05	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/06/06	73,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/06	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/07/07	73,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/07	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/08/06	73,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/08	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/09/04	73,001	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/09	NI	860034813	INTALPEL S A	30	730,000	1997/10/06	73,001	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/10	NI	860034813	INTALPEL S A	30	840,000	1997/11/10	84,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/11	NI	860034813	INTALPEL S A	30	840,000	1997/12/05	84,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>
1997/12	NI	860034813	INTALPEL S A	30	840,000	1998/01/07	84,000	0	.00	N	01-COLPATRIA	<input type="radio"/>

1998/02	NI	860034813	INTALPEL S A	30	840,000	1998/03/05	84,000	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/03	NI	860034813	INTALPEL S A	30	840,000	1998/04/08	84,000	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/04	NI	860034813	INTALPEL S A	30	960,000	1998/05/07	96,000	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/05	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,120,000	1998/06/05	112,000	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/06	NI	860034813	INTALPEL S A	30	992,000	1998/07/06	99,200	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/07	NI	860034813	INTALPEL S A	30	960,000	1998/08/04	96,000	0	.00	N	COLPATRIA	01-
1998/08	NI	860034813	INTALPEL	30	960,000	1998/09/07	96,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1998/09	NI	860034813	INTALPEL	30	960,000	1998/10/07	96,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1998/10	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1998/11/05	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1998/11	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1998/12/07	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1998/12	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1999/01/06	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/01	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1999/02/05	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/02	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1999/03/05	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/03	NI	860034813	INTALPEL	30	1,030,000	1999/04/09	103,001	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/04	NI	860034813	INTALPEL	30	1,100,000	1999/05/07	110,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/05	NI	860034813	INTALPEL	30	1,100,000	1999/06/03	110,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/06	NI	860034813	INTALPEL	30	1,100,000	1999/07/07	110,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/07	NI	860034813	INTALPEL	30	1,100,000	1999/08/05	110,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/08	NI	860034813	INTALPEL	30	1,136,667	1999/09/06	113,666	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/09	NI	860034813	INTALPEL	30	1,100,000	1999/10/06	110,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/10	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	1999/11/05	116,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/11	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	1999/12/06	116,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
1999/12	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	2000/01/06	116,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
2000/01	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	2000/02/04	116,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
2000/02	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	2000/03/06	115,926	0	.00	N	COLFONDOS	10-
2000/03	NI	860034813	INTALPEL	30	1,160,000	2000/04/06	116,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
2000/04	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/05/05	122,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-
2000/05	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/06/07	122,000	0	.00	N	COLFONDOS	10-

2000/06	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/07/07	122,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/07	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/08/04	122,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/08	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/09/06	122,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/09	NI	860034813	INTALPEL	30	1,220,000	2000/10/05	122,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/10	NI	860034813	INTALPEL	30	1,280,000	2000/11/07	128,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/11	NI	860034813	INTALPEL	30	1,280,000	2000/12/06	128,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2000/12	NI	860034813	INTALPEL	30	1,280,000	2001/01/05	128,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/01	NI	860034813	INTALPEL	30	1,323,000	2001/02/05	132,297	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/02	NI	860034813	INTALPEL	30	1,280,000	2001/03/06	128,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/03	NI	860034813	INTALPEL	30	1,280,000	2001/04/05	128,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/04	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/05/07	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/05	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/06/06	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/06	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/07/06	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/07	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/08/06	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/08	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/09/06	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/09	NI	860034813	INTALPEL	30	1,340,000	2001/10/04	134,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/10	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2001/11/07	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/11	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2001/12/06	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2001/12	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2002/01/08	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/01	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2002/02/06	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/02	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2002/03/06	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/03	NI	860034813	INTALPEL	30	1,400,000	2002/04/04	140,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/04	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/05/07	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/05	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/06/06	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/06	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/07/05	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/07	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/08/06	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/08	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/09/05	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/09	NI	860034813	INTALPEL	30	1,460,000	2002/10/03	146,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○

2002/10	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2002/11/07	152,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/11	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2002/12/05	152,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2002/12	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2003/01/07	152,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2003/01	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2003/02/05	152,000	0	.00	N	10-COLFONDOS	○
2003/02	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2003/03/05	152,000	7,600	.00	N	10-COLFONDOS	○
2003/03	NI	860034813	INTALPEL	30	1,520,000	2003/04/03	152,000	7,600	.00	N	10-COLFONDOS	○
2003/04	NI	860034813	INTALPEL	30	1,570,000	2003/05/06	157,000	7,850	.00	N	10-COLFONDOS	○
2003/05	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,570,000	2003/06/06	157,051	7,849	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/06	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,570,000	2003/07/04	156,951	7,849	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/07	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,570,000	2003/08/05	156,951	7,849	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/08	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,570,000	2003/09/03	156,951	7,849	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/09	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,570,000	2003/10/06	156,951	7,849	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/10	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2003/11/06	162,001	8,099	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/11	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2003/12/03	162,001	8,099	.00	N	19-SKANDIA	○
2003/12	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2004/01/07	162,001	8,099	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/01	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2004/02/04	162,001	24,299	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/02	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2004/03/04	162,001	24,299	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/03	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,620,000	2004/04/06	162,001	24,299	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/04	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/05/06	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/05	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/06/04	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/06	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/07/07	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/07	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/08/05	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/08	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/09/03	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/09	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/10/05	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/10	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,680,000	2004/11/05	168,001	25,199	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/11	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,788,000	2004/12/03	178,841	26,819	.00	N	19-SKANDIA	○
2004/12	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,740,000	2005/01/05	174,001	26,099	.00	N	19-SKANDIA	○
2005/01	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,740,000	2005/02/03	182,701	26,099	.00	N	19-SKANDIA	○

2005/02	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,740,000	2005/03/03	182,701	26,099	.00	N	19-SKANDIA	<input type="radio"/>
2005/03	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,740,000	2005/04/05	182,701	26,099	.00	N	19-SKANDIA	<input type="radio"/>
2005/04	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,800,000	2005/05/04	189,000	27,000	.00	N	19-SKANDIA	<input type="radio"/>
2005/05	NI	860034813	INTALPEL S A	30	1,800,000	2005/06/03	189,000	27,000	.00	N	19-SKANDIA	<input type="radio"/>

Exportar Consolidado a Excel

Exportar Detallado a Excel

Ver Detalle

Regresar

a la sociedad, denominada **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.** con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y con **NIT 830.515.294-0**, en la actualidad representada legalmente por la señora **VERÓNICA DIAZ DEL CASTILLO ROMÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 52.698.501** y cuyo objeto social principal es la prestación de servicios de asesoría jurídica, para que en su calidad de **APODERADA** y a través de cualquiera de los abogados inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso represente y ejecute los siguientes actos en nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**:

a) REPRESENTACIÓN: Para que ejerza la representación legal y judicial de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** en las acciones judiciales o administrativas que esta entidad deba adelantar o que se adelanten en su contra ante cualquier entidad pública, privada o judicial y sus organismos vinculados o adscritos. En desarrollo de esta facultad podrá notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas, presentar reclamaciones, derechos de petición, instaurar o contestar demandas en las que sea parte **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, llamar en garantía, asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, recibir, comprometer, presentar recursos y, en general, ostentará todas las facultades previstas en el artículo 77 del Código General del Proceso. -----b)

DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS: Para que desista de los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que se promuevan. -----

c) TRANSIGIR Y CONCILIAR: Para que transija y concilie pleitos y diferencias que ocurran respecto de los derechos y obligaciones de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** conforme a las instrucciones dadas por el poderdante, además para que asista en calidad de representante legal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.** a las audiencias de conciliación judiciales, con todas las facultades inherentes al



mandato establecidas en el artículo 77 del CGP, inclusive la de conciliar, conforme a las instrucciones dadas por el poderdante.

d) Las demás actuaciones que se requieran de manera que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A se encuentre debidamente representado en los asuntos que trata el presente poder. —

EL(LA) COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE: 1.- Verificó cuidadosamente sus nombres y apellidos, los números de su documento de identidad y demás datos, y por lo tanto, aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y, en consecuencia, asume la responsabilidad de lo manifestado. 3.- Conocen la Ley y saben que el Notario responde únicamente de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que formen parte del mismo. (Arts. 9 y 35 Decreto Ley 960/1970). LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LOS OTORGANTES Y DEL NOTARIO. Las aclaraciones, modificaciones o correcciones que tuvieran que hacerse deberán ser subsanadas mediante el otorgamiento de una nueva escritura suscrita por quienes intervinieron en la inicial y sufragada por ellos mismos. (Art. 102 Decreto Ley 960/1970).

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN Hecho este instrumento por el compareciente, dio su asentimiento a todas y cada una de sus partes y al acto en general; fue advertido sobre las formalidades legales, lo aprobó y firmó ante mí y conmigo el Notario quien en esta forma lo autorizo y doy fe.

Esta escritura pública se extendió en las hojas de Papel Notarial de seguridad Nos.: SDO424569108 SDO624569107

DERECHOS NOTARIALES (Resolución No. 1299 DE 2020)

DERECHOS NOTARIALES: \$ 61.700

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$6.600

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO \$ 6.600 I.V.A: \$ 17.841

OTORGANTE:

[Signature]
SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA C.C. No. 5819902 de Bogotá

Quien obra en calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

con NIT. 800.148.514-2 Dirección: N. 19 No. 11 A 30.

Teléfonos: 558 4300.

Actividad Económica: Abogada.

Correo Electrónico: cliente@skandia.com.co.

DATOS DE LA APODERADA: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. con N.I.T.
830.515.294-0

Dirección: Calle 82 N. 10 -33 Piso 5.

Teléfonos: 317 4628

Actividad Económica: Servicios Jurídicos.

Correo electrónico: agodoylegodoycordoba.com.

NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

[Signature]
PATRICIA HERRERA REINA

Radicar: FS Elaborar: FS Liquidar: FS Tomo Firmas: FS Revisar:



SDC326623373

Notaria
43

Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C., 2020-07-23 15:58:18 Documento: 64v8m

Ante mi el suscrito Notario Cuarenta y tres del Circulo de Bogotá D.C. comparecio:

FONSECA CORREA SANDRA VIVIANA

Identificado con C.C. 53177012

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.



FOTO

160-63d64ff7

**NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.**



Notaria 43 Encargada

SDC326623373



QADJHL4SR1A0SNSE

04/05/2020

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

NOTARIA 43 DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO



Es primera copia tomada de su original:
escritura pública N°. 321 de 23 de Julio / 2020
que expidió y autorizó en 14 hojas útiles
con destino a: 61 afegante

Papel Art. 6°. Ley 20 de 1.976
Bogotá D.C. 27 JUL 2020

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DE VIGENCIA
LA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43)
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:
QUE EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA A
QUE SE REFIERE LA PRESENTE COPIA NO APARECE
NOTA DE REVOCATORIA.

DOY FE BOGOTÁ D.C. 27 JUL 2020

[Handwritten signature]



Notaria 43 Encargada
SDC726622036



JXW8CSTSPAUCOA5Y

04/05/2020



SDC226623383

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LÍMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S."
Nit: 830.515.294-0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2019
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: agodoy@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Calle 82 N° 10 - 33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: agodoy@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.

PATRICIA HERRERA REINA
Notaria 43 Encargada

SDC226623383

IAR1LJ7PVLGNSR89

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

Que por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad



SDCA20621352

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Que por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. En todo caso, la sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$10.000.000.000,00
No. de acciones	: 10.000.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$152.683.000,00
No. de acciones	: 152.683,00
Valor nominal	: \$1.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$152.683.000,00
No. de acciones : 152.683,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la junta directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la junta directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la junta directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva; E) Presentar oportunamente a la junta directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la junta directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el informe especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la asamblea general de accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

SDC626623381

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la junta directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Notaría 43 Encargada

SDC626623381

7UDDPT4N80CM3YCX

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019 registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	c.c. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	c.c. 1.043.015.010	287.301

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 9 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Vergel Ramirez Laura	c.c. 1.090.469.651	321.394
Rey Londoño Oscar Alberto	c.c. 1.140.866.487	300.858

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 2 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	c.c. 1.151.946.356	253.718
Carolina Martinez Pelaez	c.c. 1.037.612.591	252.761
Gabriela Restrepo Caicedo	c.c. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	c.c. 1.070.967.487	325.589
Juan Sebastian Sanchez Amaya	c.c. 1.022.398.006	310.573
Luis Miguel Diaz Reyes	c.c. 1.018.464.896	331.655
Maria Alejandra Serrano Ceballos	c.c. 1.144.084.440	325.295
Omar Alonso Camargo Mercado	c.c. 1.043.010.907	285.256
Paula Andrea Arboleda Villa	c.c. 1.152.201.387	270.475
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	c.c. 1.013.641.075	278.768

CERTIFICA:

Que por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).



SDC826623380

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: Chavez Alvarado Andres Felipe Identificación: T.P
c.c. 1.075.655.441 232007

CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	c.c. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amarante Andrea	c.e. 527.443	283576
Benrey Zorro Juliana	c.c. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	c.c. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	c.c. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	c.c. 1.143.869.669	338180

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Godoy Cordoba Andres Dario	C.C. No. 000000080086521
Primer Suplente Del Gerente	Godoy Fajardo Carlos Hernan	C.C. No. 000000019251626

Mediante Acta No. 22 del 11 de agosto de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2016 con el No. 02132210 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo	Diaz Del Castillo	C.C. No. 000000052698501

Notaria A3 Encargada
SDC826623380



IYSPHKDBY2ZX2EDA

04/05/2020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
 Recibo No. AA20535814
 Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Del Roman Veronica
 Gerente

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos	C.C. No. 000000019251
Segundo Renglon	Hernan Mendoza	C.C. No. 000000019431
Tercer Renglon	Gnecco Gustavo Jose	C.C. No. 000000080086
	Godoy Cordoba Andres	
	Dario	

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

Mediante Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Godoy Fajardo Carlos	C.C. No. 000000019251
	Hernan	
Tercer Renglon	Godoy Cordoba Andres	C.C. No. 000000080086
	Dario	

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018 con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Segundo Renglon

Gnecco

Mendoza

C.C. No. 000000019431641

Gustavo Jose

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 14 del 27 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2014 con el No. 01825090 del Libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal

Perez

Echeverry

C.C. No. 000000031150288

Socorro

PODERES

Que por documento privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:

ANA CRISTINA MEDINA GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 52.991.736

NOMBRE:

CARLOS HERNÁN GODOY FAJARDO

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.251.626

NOMBRE:

FRANCISCO ERNEY BURITICÁ RUIZ

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 10.529.620

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ANDRÉS FERNANDO DA COSTA HERRERA

C.C. 80.505.099

NOMBRE:
GUSTAVO GNECCO MENDOZA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 19.431.641

NOMBRE:
SANTIAGO ANDRÉS MARTÍNEZ MÉNDEZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 81.717.493

NOMBRE:
MARÍA ISABEL VINASCO LOZANO

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 53.006.455

NOMBRE:
JHON SEBASTIÁN MOLINA GÓMEZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:
SERGIO ANDRÉS CAMPOS GUZMÁN

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:
DIANA LUCIA SAAVEDRA CASTAÑEDA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.026.579.845

NOMBRE:
JOSÉ DAVID OCHOA SANABRIA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.010.214.095

NOMBRE:
CESAR AUGUSTO ORJUELA CÁCERES

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 80.793.573

NOMBRE:
JOHANA ALEXANDRA DUARTE HERRERA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 53.077.146

NOMBRE:
YAT SING CHÍA MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.018.445.390

NOMBRE:
JENNIFER LORENA MOLINA MESA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.129.511.816

NOMBRE:
DANIEL MAURICIO CONTRERAS JAIMES

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.090.424.399

NOMBRE:
ÁNGELA MARÍA MORA PARRA

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 1.020.780.646

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:



SDC226623378

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20
Recibo No. AA20535814
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FABIO ANDRÉS SALAZAR RESLEN

C.C. 1.032.358.377

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

RICARDO JOSÉ AGUIRRE BEJARANO

C.C. 1.018.442.942

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

ERNESTO ROSALES JARAMILLO

C.C. 1.090.420.262

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

JUAN SEBASTIÁN VELANDIA PÁRRAGA

C.C. 1.018.456.181

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.

01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX

Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios

01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX

Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas

02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX

Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX

Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX

Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de junio de 2020 Hora: 18:55:20

Recibo No. AA20535814

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20535814AA165

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de marzo de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.00 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 52 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.
PROTOCOLO
ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA DE BOGOTÁ D.C.
PROTOCOLO
ESPACIO EN BLANCO

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA SIGLA: SKANDIA PENSIONES
CESANTIAS S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 4307 del 06 de diciembre de 1991 de la Notaría 35 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE
CESANTIAS SKANDIA S.A.

Escritura Pública No 1007 del 10 de marzo de 1993 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
pudiendo utilizar en el desarrollo de su objeto social la abreviación ASKANDIA S.A.

Escritura Pública No 511 del 02 de febrero de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 6394 del 21 de diciembre de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS absorbe a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PENSIONAR
S.A. Sigla: PENSIONAR, quedando esta última disuelta sin liquidarse.

Escritura Pública No 3361 del 19 de diciembre de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
por el de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.,
pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y
CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 1323 del 13 de junio de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica
su razón social de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA
PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL -
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas
OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó
SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 2413 del 03 de octubre de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). ,
modifica su razón social de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL
SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD
MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. pudiendo usar la sigla OLD
MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 570 del 03 de abril de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica
su razón social de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.
pudiendo usar la sigla OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. por la de SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 5



El emprendimiento
es de todos

Matrícula

SDC626623376



ZOS1UZ5THTROBQGL

La validez de este documento puede verificarse en el sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Escritura Pública No 2498 del 16 de diciembre de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 4754 del 02 de diciembre de 1991 Resolución S.B. 4754 del 12 de diciembre de 1991 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTÍAS. Resolución S.B. 2484 del 22 de diciembre de 1998 Esta entidad autorizó a la citada sociedad para fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de un Presidente y un Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si la Junta Directiva considera necesario por último cargo. Tanto el Presidente como el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales serán miembros de la Junta Directiva y ser reelegidos indefinidamente. El Presidente de la Sociedad tendrá Suplentes: Primero (1°), Segundo (2°) y Tercero (3°) quienes en su orden ocuparán la Presidencia de la Sociedad en los casos de faltas absolutas temporales o accidentales del titular. Por su parte el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si este cargo se provee, podrá tener, si la Junta Directiva lo considera necesario, un suplente que lo reemplazará en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales. Entenderá que la representación legal de la sociedad es múltiple. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD:** El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza del cargo, especialmente las siguientes: a) Ser Representante Legal de la Sociedad ante los Accionistas, ante todas las autoridades de orden administrativo y jurisdiccional; b) Ejecutar u ordenar todas las operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, en los estatutos y en las decisiones de la Junta Directiva; c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, un Balance General de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la Sociedad, un detalle completo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y un Proyecto de Distribución de Utilidades; d) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales, de los terceros y de los patrimonios que administre, vigilar la actividad de los empleados de la Sociedad e implementar las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social; e) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente y hacer las convocatorias en caso cuando lo ordenen los Estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la Sociedad o el Revisor de los (sic) Fondos de Pensiones; f) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informado a tal organismo del curso de los asuntos sociales; g) Presentar a la Junta Directiva el Balance del ejercicio y suministrar todos los informes que solicite en relación con la Sociedad y sus actividades; h) Cumplir órdenes e instrucciones que le imponga la Asamblea General y la Junta Directiva; i) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados que requiera el buen giro de las actividades sociales. Cuando se trate de apoderados generales se requerirá autorización previa de la Junta Directiva; j) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente los requisitos exigencias que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la Sociedad y sus administraciones; k) Celebrar los contratos relativos a los fondos que administre la Sociedad de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los reglamentos que para ese efecto se expidan; m) Proteger y defender los patrimonios de los fondos que administra. n) Nombrar y remover a los empleados que requiera el buen funcionamiento

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



SDC826623375

Sociedad, debiendo obtener la autorización de la Junta Directiva en aquellos casos en que ésta determine el requisito; ñ) Obtener autorización de la Junta Directiva para aquellos actos o contratos que lo requieran de acuerdo con estos estatutos o las propias determinaciones de la Junta Directiva; p) Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias de la sociedad, dentro o fuera del territorio nacional. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES:** Ser representante Legal de la Sociedad ante las autoridades de la Rama Jurisdiccional del Poder Público ante autoridades públicas o privadas a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas, por disposición normativa funciones jurisdiccionales o funciones que en algún momento fueron competencia de funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, b) Asesorar al Presidente para la designación de los poderados especiales que Representen a la Sociedad ante las autoridades mencionadas en el literal anterior.) Todas aquellas que el Presidente le delegue. PARÁGRAFO: En desarrollo de las facultades del literal a) anterior, el Representante Legal para asuntos Jurisdiccionales podrá suscribir los documentos que requiera para el debido cumplimiento de su cargo, tales como derechos de petición, tutelas, oficios, memoriales, poderes, sustituciones, entre otros. (Escritura Pública 3361 del 19 de diciembre de 2013 Notaria 43 de Bogotá). Mediante acta 217 del 24 de mayo de 2012 la Junta Directiva estableció la limitación a las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: El Presidente podrá celebrar todos los actos y/o contratos, de carácter nacional e internacional, comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, pero someterá de manera previa a la aprobación de la junta directiva todo acto y/o contrato que exceda del equivalente en Pesos Colombianos de Quinientos Mil (500.000) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional (oficio 2012067008). Mediante acta 224 del 19 de diciembre de 2012 la Junta Directiva aprobó una adición a las limitaciones ya registradas en las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Adicionalmente, se exceptiona de esta limitación a todos los actos y/o contratos que sean necesarios para cumplir o atender requerimientos legales o regulatorios y de regulación prudencial, tales como margen de solvencia, inversiones forzosas, capital y reservas de cualquier tipo. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a

SDC826623375



NL94KOMF7NEKNV8C

04/05/2020

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 3 de 5



El emprendimiento
es de todos

Certificado Generado con el Pin No: 8407146422535612

Generado el 05 de julio de 2020 a las 18:02:20

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional. (oficio 2013004163).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Santiago García Martínez Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016	CC - 79945537	Presidente
Juan Daniel Frias Díaz Fecha de inicio del cargo: 07/07/2016	CC - 79942019	Primer Suplente del Presidente
Eduardo Duque Dubón Fecha de inicio del cargo: 07/09/2012	CC - 89000114	Segundo Suplente del Presidente
Fernando Augusto Medina Rojas Fecha de inicio del cargo: 20/10/2016	CC - 79382181	Tercer Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019130790-000 del día 18 de septiembre de 2019, que con documento del 14 de junio de 2019 renunció al cargo de Tercer Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 307 del 21 de agosto de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Isabel Villa Ramírez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 43505702	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Jorge Emilio Pacheco Monroy Fecha de inicio del cargo: 09/02/2016	CC - 80041243	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Daniela García Campos Fecha de inicio del cargo: 05/09/2019	CC - 1019096074	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Javier León Veloza Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 3190261	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Patricia Hurtado Cardona Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013	CC - 31976756	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Ana Lucia Echeverri Botero Fecha de inicio del cargo: 11/01/2018	CC - 43273189	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Angelica María Izquierdo Beltrán Fecha de inicio del cargo: 04/10/2018	CC - 38558164	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
Diego Alejandro Rodríguez Ramírez Fecha de inicio del cargo: 18/06/2019	CC - 1020786332	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales
-Sandra Viviana Fonseca Correa Fecha de inicio del cargo: 22/05/2017	CC - 53177012	Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co



ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN



SDC126623374

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."

Notaria Encargada

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NOTARIAS DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

NOTARIAS DE BOGOTÁ D.C.
ESPACIO EN BLANCO
PROTOCOLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Nit: 830515294 0 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoria, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$219.412.000,00
No. de acciones : 219.412,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$219.412.000,00
No. de acciones : 219.412,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo C.C.	1.151.946.356	253.718
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Puentes Cespedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Palacio Varona Daniela	C.C. 1.019.132.452	353.307
Bejarano Rengifo Diana Marcela	C.C. 1.144.087.101	315.617

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número 02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar Cortes	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Michelle Valeria Mina Marulanda	C.C. No. 1.234.195.459	359423

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	30272

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022 , inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez	C.C No. 1.023.697.512 LT 30201	
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090
Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2023, inscrito el 22 de Febrero de 2023 con el No. 02936798 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Brandon Camilo Archila Jaimes	C.C No. 1.098.817.164	361.004
Miguel Angel Cadena Miranda	C.C No. 1.020.792.591	380.420

Por Documento Privado del 30 de junio de 2023, inscrito el 5 de julio de 2023 con el No. 02993832 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Camila Soler Sánchez	C.C No. 1.014.290.875	352.159
Luis Eduardo Calderón Pastrana	C.C No. 1.004.155.816	406.112
Yudi Marcela Barajas Soto	C.C No. 1.098.762.996	303.201

Por Documento Privado del 22 de agosto de 2023, inscrito el 24 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Agosto de 2023 con el No. 03010137 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Sharik Alejandra Mateus Diaz	C.C No. 1.010.240.279	403.554
Lorena Paola Castillo Soriano	C.C No. 1.032.505.290	404.442
Vanessa Gómez Quintero	C.C No. 1.032.509.355	409.053
Laura Camila Guanumen Piñeros	C.C No. 1.032.474.517	355.025
Sebastián Huertas Trujillo	C.C No. 1.020.844.303	399.622

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Fajardo	Godoy C.C. No. 19251626

Por Acta No. 67 del 3 de agosto de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2022 con el No. 02870110 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del	Caroline Gonzalez	Fraser C.C. No. 1020796887

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina	C.C. No. 52991736
	Gonzalez	
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	
Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy	C.C. No. 19251626
	Fajardo	

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	

Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

Por Acta No. 65 del 15 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2023 con el No. 02981566 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina Gonzalez	C.C. No. 52991736

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal BAKER TILLY COLOMBIA N.I.T. No. 800249449 5
Persona LTDA
Juridica

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nydia Jasmin Mora Torres	C.C. No. 1022334637 T.P. No. 165330-T
Revisor Fiscal Suplente	Erika Tatiana Castaño Cruz	C.C. No. 1026276146 T.P. No. 272902-T

PODERES

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ana Cristina Medina González	C.C. 52.991.736

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Carlos Hernán Godoy Fajardo	C.C. 19.251.626

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Francisco Erney Buriticá Ruiz	C.C. 10.529.620

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Andrés Fernando Da Costa Herrera	C.C. 80.505.099

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Gustavo Gnecco Mendoza	C.C. 19.431.641

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
---------	-----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54**

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Santiago Andrés Martínez Méndez	C.C. 81.717.493
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
María Isabel Vinasco Lozano	C.C. 53.006.455
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jhon Sebastián Molina Gómez	C.C. 1.018.466.887
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Sergio Andrés Campos Guzmán	C.C. 1.015.433.588
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
José David Ochoa Sanabria	C.C. 1.010.214.095
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Juan Sebastián Velandia Párraga	C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX
Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de	02790542 del 9 de febrero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 02862790 del 28 de julio de
2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 60.705.863.638

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de septiembre de 2023 Hora: 12:09:54

Recibo No. AB23635932

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2363593266AAF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
LICENCIA TEMPORAL

RESOLUCIÓN LT30201

NOMBRES DIANA ESPERANZA
APELLIDOS GOMEZ FONSECA
CEDULA 1.023.967.512
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA



17/03/2022
FECHA DE
EXPEDICIÓN

13/12/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO

Diana Gomez
Martha Esperanza Cuevas Melendez
MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELENDEZ

Directora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.967.512

GOMEZ FONSECA

APELLIDOS

DIANA ESPERANZA

NOMBRES

Diana Gomez

FIRMA

